

SEPTIEMBRE 18 DE 1912

43.^a REUNION. CONTINUACION DE LA 18.^a SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL GRAL. ROSENIO M. FRAGA

Diputados presentes: Acosta, Agote, Albarracín, Alvar, Anchorena, Arancibia Rodríguez, Araya, Arraga, Atencio, Avellaneda, del Barco, Bas, Beltrán, Bengolea, Bercetche, Bréard, Cabanillas, Cafferata, Calderón, Cantilo, Carbamido, Carbó, Cárcano, Carlés, Carranza, Castillo, Cesia, Conforti, Coronado, Echegaray, Estrada, Etchecopar, Etcheverry, Fonrouge, Frers, Freyre, Frías, Funes, Galigniana Segara, Gallo, Gómez (C. F.), Gómez (J. R.), Gonnet, González Bonorino, González Pérez, Guovara, Igarzábal, Jaramillo, Justo, Lassaga, Laurencena, Lavié, Lezica, Lubary, Luro, Lloét, Mariño, Massa, Mena, Molina, Morá y Araujo, Moyano, Oliver, Olmedo, Padilla (E. I.), Padilla (M. M.), Palacios, Parera (F. M.), Parera (R. A.), Pastor, Penna, Peña, Pérez, Pesenti, Pinedo, Rolón, Rothe, Saavedra Lamas, Saguier, Santamarina, Santillán, Semprún, Tenreiro, de la Torre, Valdez, del Valle, Varela, de la Vega, Vergara, Zeballos (E. S.)—Ausentes con licencia: Avalos, Drago, Loza, Serrey.—Ausentes con aviso: Arias, Bonifacio, Ceballos (A.), Escobar, Leguizamón, Méndez Casariego, Moreno, Ordóñez, Paz, Sánchez Viamonte, Terán.—Ausentes sin aviso: Alvarez, Benegas, Castañeda Vega, García González, Leiva, Linares, López, Sobral.

SUMARIO N.º 43

5

1

Nombramiento de Secretario de la honorable Cámara.

Despacho de las comisiones.

2

Mensaje del Poder ejecutivo adjuntando la petición de don Marcelino González, referente a la concesión de terrenos en Choele-Choele.

Peticiones particulares.

3

Nota del Poder ejecutivo anunciando la concurrencia del señor ministro del interior a la sesión del 19 del corriente.

Proyecto de ley del señor diputado Ramón J. Cárcano, autorizando la inversión de 130.000 pesos en la construcción de un puente sobre el río V, provincia de Córdoba.

4

Mensaje y proyecto de ley del Poder ejecutivo abriendo un crédito suplementario al departamento de justicia e instrucción pública por \$ 244.851.79, para pago de cuentas pertenecientes a ejercicios vencidos.

8

Proyecto de ley del señor diputado Juan F. Cafferata, acordando la suma de 20.000 pesos para la construcción de un hospital en Alta Gracia.

9

Resolución de la moción pendiente desde la reunión anterior, para tratar el despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de ley sobre ampliación del edificio de la sociedad La Fraternidad, de Concepción del Uruguay.

10

Integración de las comisiones de presupuesto y revisora de pensiones y jubilaciones.

11

Indicación para agregar la comisión de negocios constitucionales a la de guerra a efecto de estudiar la reclamación presentada por el comandante Astengo.

12

Integración de la comisión de códigos.

13

Moción de fijar día para la discusión del proyecto de ley sobre regularización de la deuda de la municipalidad de la Capital con el Consejo nacional de educación.

14

Moción para tratar inmediatamente el despacho de la comisión de agricultura en el proyecto de ley acordando un subsidio a la sociedad rural Río Quinto, de Villa Mercedes, San Luis.

15

Moción referente al despacho de una solicitud de vecinos de Barracas, Avellaneda y Lomas de Zamora sobre construcción de obras de saneamiento en dichas localidades.

16

Consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley sobre organización del Departamento nacional del trabajo.

En Buenos Aires, a 18 de septiembre de 1912, el señor presidente declara reabierta la sesión a las 4 y 10 p. m.

1

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO

Sr. Presidente—Habiéndose acogido a los derechos de la jubilación el señor secretario Ovando, la honorable Cámara ha fijado la sesión de este día para proceder a la designación de su reemplazante.

Se va a proceder a la votación nominal, que es el procedimiento establecido por el reglamento para este caso.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Había recibido la noticia oficial de que en esta sesión se ha de proceder al nombramiento de un secretario de la Cámara, por haber quedado vacante uno de los dos puestos que existen, y en seguida comprendí que era llegado el momento de hacer valer en el seno de ella algunos argumentos en favor de una proposición que ya he anunciado aquí, en presencia del señor ministro de hacienda, cuando hice notar el enorme despilfarro de dineros públicos en empleos inútiles, de lo que esta Cámara da el ejemplo con sus dos secretarios, dos prosecretarios y un sinnúmero de oficiales subalternos.

Sr. Presidente—Si me permite el señor diputado una interrupción...

El reglamento dispone que haya dos secretarios y establece que deben ser designados en la forma que he propuesto.

Sr. Justo—A eso voy.

Sr. Presidente—Cualquier modificación al reglamento debe ser materia de un proyecto, que debe pasar a estudio de la comisión.

Sr. Justo—Yo voy a proponer que no se nombre secretario. Que se suspenda ese nombramiento hasta tanto se vote el nuevo presupuesto de la honorable Cámara.

Varios señores diputados—¡Existe una resolución de la Cámara!

Sr. Varela—Está en el presupuesto vigente.

Sr. Padilla (M. M.)—La Cámara ha resuelto ocuparse del nombramiento en esta sesión.

Sr. Justo—Iba a fundar mi voto en ese sentido. Si no se me permite hacerlo,

surgidos en estos últimos años prueban este aserto. Y aquí, séanos permitido hacer un pequeño paréntesis.

Heimos visto desfilar numerosos proyectos tendientes a la construcción de casas para obreros y todos con el loable propósito de evitar el hacinamiento de familias en lúgubres conventillos, verdaderos focos de enfermedades infecciosas y donde la higiene, luz y aire no se conocen; pero hasta el presente muy poco se ha hecho en ese sentido. Es que esos proyectos teóricamente viables, en la práctica son impedidos por un cúmulo de dificultades sobre su ubicación, costo del terreno para que el interés a devengarse sea accesible al obrero, vecindad a los centros de sus actividades, o medios de comunicación rápidos y baratos. El principal impedimento es el costo del terreno y al elegir uno barato, ahí tenemos un ejemplo con las casas construidas por la municipalidad, en Nueva Pompeya, que a cada lluvia se inundan.

La práctica nos ha probado que el obrero mismo sabe buscar sus comodidades, y conveniencias, sólo se requiere que los poderes públicos se ocupen de facilitarle allí en donde él se radica los servicios indispensables y las seguridades para su hogar para que éste se desenvuelva lozano, feliz y tranquilo.

Como ya dejamos expuesto, hacia ambas márgenes del Riachuelo y río Matanzas se extiende la edificación, la gran área ocupada para ésta reduce el espacio de filtración; los pequeños arroyos, desagües antiguos, fueron cegados, y las aguas son todas dirigidas hacia esos ríos, hoy impotentes para albergarlos en sus lechos, con el resultado que las inundaciones son y serán cada vez más frecuentes con su corolario de desgracias personales y pérdidas materiales.

Basta una sola mirada a un mapa de la Capital federal para convencerse que los grandes recodos y curvas cerradas de esos ríos imposibilitan la corriente del agua y así vemos que no obstante ser el nivel de aquella zona más elevado que la parte sudeste de la Capital cuando las aguas allá desbordan, aquí, en la parte canalizada, se mantienen bajas.

Bienvenidas sean todas aquellas obras que las municipalidades realizan y tienen que realizar, tendientes a fijar los niveles necesarios para impedir el estancamiento de las aguas llevándolas a los ríos, pero si éstos desbordan por las razones que dejamos enumeradas, aquellas obras serán completamente inútiles y sólo servirán para llevar el agua donde tal vez no la hay.

La rectificación y canalización del Riachuelo y río Matanzas es, pues, un problema que necesita una inmediata e improrrogable solución; así lo demanda el creciente desarrollo de la Capital; así lo pide la seguridad personal de miles de personas; así lo requiere el comercio de cabotaje, que, con la apertura de esa nueva vía encontrará la expansión que hoy lo resiente, llevando el progreso a aquellas zonas olvidadas. Y si todas estas verdades no fueran suficientes, allí está germinando el microbio del paludismo, ya denunciado, del tifus existente, y otras plagas infecciosas que llevarán el contagio al centro mismo de la bella Capital de la República Argentina.

La faz financiera de la obra es aparentemen-

te costosa, pero entendemos que con un bien meditado plan, su realización no demandará grandes sumas, especialmente si se considera que todavía había muchos propietarios que cederían gustosos las tierras necesarias para facilitar la ejecución de esa obra.

No es nuestra intención proponer a la honorable cámara los medios para arbitrar los fondos necesarios, como tampoco entrar en tecnicismos sobre las obras, y es sólo por vía de información que nos permitimos recordar los grandes problemas solucionados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires: los desagües de la provincia y el delta del Paraná.

En la misma fecha y en análogos términos, nos dirigimos a la honorable Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, en razón de la jurisdicción que tiene esa provincia sobre una de las márgenes del Riachuelo.

Honorable cámara. Representantes del pueblo: Este acude a vosotros para presentaros su queja, sus necesidades, sus anhelos; e interrumpiendo vuestra labor os pide dediquéis vuestra atención a este asunto, en la seguridad de que, compenetrados de su importancia y urgencia, le prestaréis vuestro más decidido apoyo haciendo que lo que es hoy tan sólo una esperanza, sea pronto una realidad.

Será justicia.

(Siguen las firmas.)

16

DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO

Sr. Presidente — Corresponde considerar el despacho de la comisión de legislación sobre organización del departamento nacional del trabajo.

A la honorable Cámara de diputados:

Vuestra comisión de legislación ha estudiado los proyectos de ley sometidos a su consideración sobre organización del departamento nacional del trabajo formulado por el señor diputado Cantilo, e inspección y vigilancia de las leyes del trabajo, por el señor diputado Palacios; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º La actual dirección general del trabajo se denominará desde la promulgación de esta ley «Departamento nacional del trabajo», dependerá del ministerio de agricultura y tendrá por funciones: preparar la legislación del trabajo, recogiendo, coordinando y publi-

cando los datos relativos al mismo; y organizar la inspección y vigilancia de las disposiciones legales que dicte el Congreso sobre la materia.

Art. 2.º El departamento estará constituido por tres divisiones principales:

- a) Legislación.
- b) Estadística.
- c) Inspección y vigilancia.

Art. 3.º El departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo.

Art. 4.º Los inspectores del trabajo debidamente autorizados tienen derecho a penetrar en los locales donde se ejerza una industria durante las horas destinadas al trabajo. La negativa del patrón importará una infracción a esta ley que se penará con multa de 100 a 500 pesos sin perjuicio de procederse al allanamiento previa orden requerida por el presidente del departamento.

Art. 5.º El departamento organizará y tendrá a su cargo, bajo el régimen que se considere más conveniente, el registro de colocaciones para obreros, con el objeto de coordinar la oferta y la demanda de trabajo. Correspóndele igualmente la inspección y vigilancia de las agencias de colocaciones particulares.

Art. 6.º El departamento estará bajo la dirección de un presidente nombrado por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, por el término de seis años.

Serán funciones del mismo: Dirigir el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo; intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo; proponer los nombramientos, ascensos, correcciones y separación de los empleados; reclamar siempre que fuera necesario la cooperación de las diferentes dependencias de la administración estando éstas obligadas a prestárselo; editar un boletín cuya distribución será gratuita a las asociaciones patronales y obreras.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, será reemplazado por el jefe de la división legislación, y en su defecto por el funcionario que designe el Poder ejecutivo.

Art. 7.º El presidente, cuando lo requieran los conflictos entre capital y trabajo, convocará y presidirá «Consejos del trabajo» compuestos en cada caso con igual número de patrones y obreros. Estos consejos tendrán durante su funcionamiento a su disposición todos los elementos de estudio necesarios para sus resoluciones y éstas pondrán término a la intervención del departamento en el caso sometido a su decisión.

Art. 8.º Toda persona que rehusé suministrar datos o informes requeridos por el departamento para el desempeño de su cometido, o los suministre con falsedad, incurrirá en una multa de 100 a 150 pesos por la primera vez y de 500 a 1.000 pesos en caso de reincidencia, a beneficio del tesoro común de las escuelas, o en su defecto sufrirá el arresto equivalente según el Código penal.

El departamento no podrá comunicar ni publicar los nombres de las personas, empresas o

sociedades a que se refieren los datos e informes. Todo empleado o agente del departamento nacional del trabajo que revele los secretos industriales o comerciales de que hubiera tenido conocimiento en razón de su cargo, incurrirá en la pena establecida en el Código penal por la revelación de secretos.

Art. 9.º Serán recursos del departamento la asignación que anualmente fije la ley de presupuesto, el rendimiento de las publicaciones que edite, y las donaciones que reciba para el desarrollo de los servicios que el mismo está destinado a prestar.

Art. 10. Se autoriza al departamento para recibir por herencia, legado o donación, en representación del Estado, los bienes o sumas de dinero que se les confie con aplicación a servicios especiales, o para el establecimiento de fundaciones e instituciones directamente vinculadas con los fines de su creación.

Art. 11. Comuníquese al Poder ejecutivo.

Sala de la comisión, septiembre 6 de 1912.

*Ernesto E. Padilla—A. C. Escobar—
Vicente C. Gallo—Alfredo L. Palacios—D. Zambrano (hijo)—G. del Barco.*

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º El departamento nacional del trabajo, instalado por decreto de 14 de marzo de 1907, dependerá del ministerio del interior.

Art. 2.º Serán funciones del departamento:

- a) Promover la prosperidad y bienestar de los trabajadores.
- b) Estudiar las cuestiones obreras.
- c) Efectuar investigaciones.
- d) Organizar servicios de inspección.
- e) Mediar en los conflictos que se susciten entre el capital y el trabajo.
- f) Recoger y publicar todos los datos referentes a las relaciones del capital y el trabajo en la República y en el extranjero.

DIVISIONES

Art. 3.º El departamento estará constituido por tres divisiones principales:

- a) Legislación.
- b) Estadística.
- c) Inspección.

Art. 4.º Corresponderá a la división legislación:

- 1.º Leyes obreras nacionales y extranjeras.
- 2.º Instituciones obreras.
- 3.º Contratos del trabajo.
- 4.º Biblioteca.
- 5.º Museo

Art. 5.º Corresponderá a la división estadística:

- 1.º Organización del trabajo.
- 2.º Condición de los trabajadores.
- 3.º Huelgas y accidentes.
- 4.º Fábricas.
- 5.º Mujeres y niños.
- 6.º Impuestos.
- 7.º Distribución geográfica del trabajo.
- 8.º Estadísticas comparadas.

Art. 6.º Corresponderá a la división inspección:

- 1.º Higiene y seguridad.
- 2.º Registro de sociedades patronales y obreras.
- 3.º Investigaciones.
- 4.º Ordenanzas gremiales.
- 5.º Agencias de colocación.
- 6.º Propaganda.
- 7.º Informes.

SUBDIVISIONES

Art. 7.º Podrán establecerse subdivisiones de acuerdo con las necesidades del departamento y fines de la ley tanto en la Capital como en las distintas provincias de la República.

COMISIÓN DIRECTIVA

Art. 8.º El departamento nacional del trabajo estará bajo la dirección de una comisión, compuesta por un presidente y dos vocales, nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación.

Art. 9.º La representación en sus relaciones y comunicaciones corresponderá al presidente de la comisión directiva.

Art. 10. La comisión funcionará con la presencia del presidente y uno de los vocales.

Art. 11. Corresponderá a la comisión directiva:

- 1.º Ejecutar las leyes dictadas por el Congreso referentes a las relaciones entre el capital y el trabajo;
- 2.º Intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo;
- 3.º Proponer al ministerio del interior los nombramientos, ascensos y la separación de los empleados de la repartición;
- 4.º Administrar los fondos, ordenar los gastos y legalizar las cuentas;
- 5.º Distribuir los asuntos de las divisiones;
- 6.º Solicitar la cooperación de las reparticiones públicas;
- 7.º Asesorar a los poderes públicos;
- 8.º Editar un boletín mensual;
- 9.º Presentar anualmente al ministerio del interior una memoria de los trabajos realizados.

Art. 12. En caso de ausencia del presidente lo substituirá el vocal designado de antemano, por la comisión para ello.

CONSEJOS DEL TRABAJO

Art. 13. La comisión directiva podrá organizar cuando lo requieran los conflictos entre el capital y el trabajo «Consejos del trabajo», compuestos en cada caso de un número igual de patronos y obreros integrados por los miembros de la comisión directiva del departamento nacional del trabajo.

Art. 14. Durante su funcionamiento los consejos del trabajo tendrán a su disposición todos los elementos reunidos por el departamento nacional del trabajo y sus resoluciones se conceptuarán definitivas.

PENALIDADES

Art. 15. Toda persona que rehuse suministrar datos o informes requeridos por el departamento nacional del trabajo para el desempeño de su cometido o los suministre con falsedad, incurrirá en la multa de 100 a 500 pesos por la primera vez y de 500 a 1000 en caso de reincidencia, a beneficio del tesoro común de las escuelas, o en su defecto sufrirá el arresto equivalente según el Código penal.

El departamento no podrá publicar los nombres de las personas, empresas o sociedades a que se refieran los datos e informes.

Todo empleado o agente del departamento nacional del trabajo que revele los secretos industriales o comerciales de que hubiera tenido conocimiento por razón de su cargo, incurrirá en la pena establecida en el Código penal para la revelación de secretos.

RECURSOS

Art. 16. Serán recursos del departamento, la asignación que anualmente fije la ley del presupuesto; rendimiento de las publicaciones que edite el departamento; subvenciones y donativos con que las corporaciones particulares quieran contribuir en cualquier forma al desarrollo de los servicios que el departamento está destinado a prestar.

Art. 17. Se autoriza al departamento para recibir por herencia, legado o donación en representación del Estado, los bienes o sumas de dinero que se les confíe con aplicación a servicios especiales o para el establecimiento de fundaciones o instituciones directamente vinculadas con los fines de la creación.

Art. 18. Comuníquese, etc.

*José Luis Cantilo—Rogelio Araya—
Vicente C. Gallo—Luis J. Roca
Ernesto H. Celesia—Delfor del Valle.*

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º El departamento nacional del trabajo establecerá un servicio especial de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativos al descanso hebdomadario y al trabajo de mujeres y niños.

Art. 2.º A los efectos del artículo anterior, el departamento nacional del trabajo, podrá solicitar de los jefes respectivos la orden de allanamiento necesario para reprimir las infracciones a las leyes enunciadas en el artículo anterior y perseguir por medio de agentes especiales la aplicación de las penalidades concernientes a tales infracciones.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Alfredo L. Palacios.

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Padilla (E. E.)—Pido la palabra.

El retardo con que se han constituido las comisiones en el presente período y la irregularidad de su funcionamiento en el primer tiempo, han impedido a la comisión de legislación que pudiera dedicar su atención a todos los asuntos que le han sido sometidos; por estas razones, y ante la necesidad de contribuir por su parte a dar materia al trabajo parlamentario, ha debido adoptar en el orden de los despachos un criterio de oportunidad, determinado no sólo por la importancia de esos asuntos, sino también por la urgencia con que son reclamados por los intereses públicos y por la posibilidad de que sean sancionados dentro del período ordinario, sin que la discusión pueda amenazar lo restante de la abundante orden del día que espera la sanción de esta honorable Cámara.

Dentro de ese programa forzosamente reducido, se justificará, lo espero, que se haya dado preferencia a asuntos de legislación social que vienen reclamando la atención del parlamento desde muchos años atrás. Y mientras preparábamos el despacho sobre los proyectos relativos a accidentes del trabajo y debíamos recibir informaciones, que aún no han llegado y que retardan por ese motivo su presentación, consideró la comisión oportuno

estudiar el que hoy se somete a la consideración de la Cámara, que tiende a dar las bases definitivas al organismo destinado a registrar lo que llamaré, en términos generales, el fenómeno del trabajo y a preparar el camino; afrontar a la vez, la solución de los complicados problemas que presenta.

Con él se viene a dar fijeza a lo que hoy es inestable e inseguro y que por lo tanto, tiene que ser ineficaz; y se quiere abrir un rumbo a la legislación del porvenir ofreciéndole base segura, molde preciso, y permitiendo que pueda tener la peculiaridad y la autonomía que el carácter nacional y las condiciones del medio reclama.

He dejado entender que este proyecto viene a edificar sobre lo existente; y, en realidad, podría decirse que la Cámara está en mora de considerarlo desde el año 1906, porque cuando la feliz iniciativa del diputado Roca incorporó al presupuesto de 1908 la nueva oficina que se llamaba el departamento general del trabajo, quedó entendido, en la discusión que con ese motivo hubo en la Cámara, que debía presentarse en las primeras sesiones del año siguiente la ley orgánica que determinaría sus funciones.

En verdad, el Ejecutivo cumplió esa promesa. El primer presidente del departamento, doctor José Nicolás Matienzo, presentó dos meses después el proyecto de ley orgánica. Es sabida, señor presidente, la competencia y la laboriosidad con que el doctor Matienzo desempeñó esas funciones, modelando la institución que recién se incorporaba a nuestro régimen administrativo. Pero ese proyecto, en el cual daba al departamento los rumbos que hoy tiene, negándole las funciones de inspección y vigilancia de policía y represivas, no pudo ser considerado, como no lo fué tampoco la iniciativa del doctor Guasch Leguizamón ni las de los presidentes del departamento del trabajo, doctores Ruzzo y Marco Avelaneda, que presentaron sucesivamente proyectos análogos en 1910. Los dos últimos proyectos eran de mayor amplitud y daban mayores atribuciones al departamento, algunas de las cuales están incorporadas en el que vamos a estudiar.

Por último, viene la iniciativa del señor diputado doctor Cantilo, comple-

mentada con el que se refiere a inspección y vigilancia, del diputado doctor Palacios, sobre la base de los cuales ha establecido su despacho la comisión.

Todos estos antecedentes han sido preciosos para la comisión, que ha recogido de ellos las ideas principales, y que los traduce dentro de los lineamientos que voy a tratar de precisar lo más sintéticamente posible.

La primera cuestión que resuelve el proyecto es la referente a la ubicación de este departamento en el mecanismo administrativo.

Se propone ponerlo bajo la dependencia del ministerio de agricultura, rechazando las observaciones que se hicieron para colocarlo bajo la dependencia del ministerio del interior, observaciones que se fundaban en que la materia del trabajo, o la cuestión social, mejor dicho, parece que estuviera preferentemente dentro de las atribuciones del ministerio del interior, desde que la cuestión social no es sólo económica, sino también política, y desde que en sus manifestaciones importantes afecta principalmente al orden público, materia que comprende la jurisdicción de este ministerio.

Es cierto que la cuestión social no es exclusivamente económica: puede decirse también que es una cuestión política, desde que afecta al gobierno del país. Pero en su determinación principal y en sus manifestaciones directas, es el aspecto económico el que predomina en ella.

Desde luego, se refiere al bienestar individual y es la base de la riqueza y de la economía del país; y es entonces lógico que vaya a ser atendido por el ministerio o departamento encargado de esta función principal.

Si presenta aspectos políticos, los presentan también todos los otros órdenes de la actividad social. Es natural, por consiguiente, que vaya a ser comprendido dentro del ministerio encargado de estudiar, de cuidar la riqueza, la economía nacional, que es el que debe estudiar el desenvolvimiento de la actividad industrial, comercial y agrícola, el que debe cuidar y atender los intereses de la producción, y, por consiguiente, debe prestar preferente atención a la

respetable y noble fuerza humana sobre la cual aquélla asienta.

Si llega a afectar el orden público, esto sucede sólo en casos excepcionales, aunque sean graves. Pero no hay que olvidar que, aun en esos casos, el punto de partida es económico, como son también económicos los intereses que entonces se ponen en juego; y, por lo tanto, debe ser el punto de vista predominante si no exclusivo, el que atiende a ese interés económico.

El hecho de dar lugar ocasionalmente a desórdenes no es una razón para que deba ser normalmente atendido por el poder encargado del orden público; todos los otros factores de la actividad social también pueden comprometerlo sin que sea necesario someterlos a la dependencia del ministerio del interior, como sucede con la propia agricultura, en muchas de sus consecuencias, y una de ellas la que ha presenciado últimamente el país con motivo de la crisis agraria.

No hay, pues, razón, señor presidente, para colocar este departamento bajo la acción del ministerio del interior por la circunstancia expresada.

Si llega el caso de que las manifestaciones del trabajo requieran la acción represiva de la autoridad, nada impide que, dentro del desenvolvimiento normal de las funciones coordinadas de la administración, el ministerio del interior preste su concurso dentro de sus atribuciones, como sucede hoy mismo en la vigilancia de la inmigración y en la policía sanitaria que está a su cargo.

No es lógico que por la atención que debe prestar la policía en los casos excepcionales mencionados, deba convertírsela en una función tutelar normal. Sería sacarla de sus funciones ordinarias y poner el importante problema obrero bajo esa acción que es con tanta razón resistida por los trabajadores, aunque no fuera más que por la circunstancia especial de que tiene que manifestarse en los momentos en que las pasiones se encienden, en que debe sentirse amenazante, porque no puede aparecer revestida del carácter neutral que da prestigio y confianza a una acción pública.

Si en los Estados Unidos ha podido

considerarse el departamento, por la ley de 1884, dependiente del ministerio del interior, hay que tener en cuenta que allí mismo la legislación ha evolucionado, y que cinco años después se le ha dado un carácter de autonomía mayor, hasta que en 1903 se constituía sobre su base, un ministerio especial, llamado departamento de comercio y de trabajo. Por lo demás, la tendencia de la legislación extranjera ha sido siempre la de considerar esta repartición dependiente de los ministerios, diré, técnicos, de los que dependen la economía y la riqueza del país. Así, ha estado en Francia bajo la dependencia del ministerio del comercio hasta que se constituyó un ministerio especial. Igual cosa ha sucedido en Bélgica, por la misma evolución.

Establecida la dependencia o la ubicación que debe tener en la administración, ha tratado la comisión de revestir a este departamento de la mayor autonomía posible, para que pueda desenvolver con toda eficacia su acción. A este fin ha proveído de manera especial al nombramiento de su presidente, rodeándolo de las solemnidades requeridas para las grandes instituciones del Estado, si bien en este punto no ha podido contar con la coincidencia de todas las opiniones, porque el señor diputado Bas ha salvado la suya sobre el particular.

Pero la cuestión que más ha preocupado, y que puede decirse que es la más importante de este despacho, es la que se refiere a la extensión de las funciones que se dan al departamento.

Hasta aquí había obedecido a las inspiraciones traducidas por el doctor Matienzo en el proyecto recordado y que de hecho han sido las que han determinado el funcionamiento del departamento, revistiendo solamente un carácter técnico y administrativo.

El doctor Matienzo no le acordaba la facultad que llamaba represiva y policial, de inspección y vigilancia, y precisaba sus fundamentos diciendo que con este género de atribuciones se complicarían las funciones propias y se les quitaría la serenidad y el carácter de imparcialidad que debe tener para asegurar el éxito de las reformas sociales.

La comisión entiende, sin embargo, que es necesario revestir al departamento del trabajo de funciones íntegras en lo que se refiere a la inspección y vigilancia, es decir, que alcancen a todas las manifestaciones del trabajo que le están sometidas, desde el hecho observado que suscita la reforma social hasta la observancia y la aplicación del detalle legal que llegue a encarnarla en sus disposiciones.

No encuentro en esto que haya temor de complicaciones ni de trabas que obstaculicen su desenvolvimiento. Desde que están confiadas a secciones separadas las funciones correspondientes, secciones que se desenvolverán con independencia, aunque guardando los necesarios puntos de contacto que la coordinación de la propia institución requiere.

No es, pues, una complicación, sino una ampliación de funciones; al lado del elemento teórico, que quiere observar y enseñar, se pone el elemento práctico, para que compruebe y corrija.

La función de estudio puede y debe ser complementada con la función de inspección y vigilancia. Es seguro que así será mucho más eficaz la acción legislativa y administrativa que se desenvuelva, puesto que se tendría por delante los resultados de la experimentación. Dentro del terreno administrativo hay mayor lógica en esperar beneficios completos de una institución a la que se le dota no sólo de los medios necesarios para observar, sino también para que pueda comprobar la oportunidad y la extensión de su acción reformadora.

Entre nosotros no sucede lo mismo que en los Estados Unidos. En la ley del 84, que, como he dicho, era una ley de transición, puesto que la forma definitiva del departamento la adquirió después, el año 1903, en esa ley no se había establecido esta función de inspección, porque ya estaban constituidos los organismos locales de inspecciones del trabajo, en los que estaba desempeñada de una manera completa y perfecta. No sucedía, pues, lo que debiera suceder aquí, sino se la creara por la ley que discutimos: el departamento quedaría constituido a medias, sin capacidad para observar los efectos de las medidas que el mismo se propone.

A todas luces conviene que se centralice, dando eficacia, a funciones que hoy, por lo dispersas, resultan inoportunas, porque dentro de las pocas leyes sociales que tenemos, resulta que tienen funciones de inspección la policía, el departamento de higiene, el departamento de educación, y también el departamento del trabajo; y estas funciones, así desempeñadas, ningún resultado práctico han de producir para el buen orden administrativo ni para los fines de la legislación y del gobierno.

La tarea está facilitada, porque, en el hecho, el departamento del trabajo ha podido ya ensayar la inspección con evidente éxito, aunque sea con el carácter voluntario que actualmente tiene. Es sabido que, por la ley de presupuesto, se pone cierto número de inspectores bajo sus órdenes, que trabajan en ese sentido. A pesar de no tener funciones precisas, la experiencia enseña que se puede recoger con su intervención los mejores frutos, y no han encontrado la menor dificultad, ni por parte de los patrones ni por parte de los obreros, para el desempeño de su tarea, a pesar de haber dictado diferentes disposiciones para corregir faltas que se habían cometido relativas a la ley del trabajo de las mujeres y de los niños, horario del trabajo de los menores, etc.

En este sentido, el terreno social está adelantado para recibir la reforma legislativa, cosa no rara entre nosotros, pues podemos presentar caso análogo para el proyecto de accidentes del trabajo, que cuando llegó a sancionarse en las cámaras francesas el seguro voluntariamente contratado, representaba 20 millones de francos de salarios. Nosotros no hemos dictado todavía la ley de accidentes del trabajo, y si se la dictara inmediatamente, nos encontraríamos con que a la fecha los mismos seguros representaban más de doscientos millones de francos.

Es, sin duda, una peculiaridad propia del problema obrero argentino, determinada, en mi concepto, por los sentimientos generosos que animan a nuestra masa social por más que algunos pudieran creer que sea el resultado de la acción de intereses apremiantes o

apremiados; pero, es indudable, que la opinión pública, con su eficaz concurso, presenta fácil la relación entre el capital y el trabajo, entre nosotros.

La tendencia legislativa contemporánea vincula la función de la inspección y de la vigilancia a la técnica y administrativa, en esta clase de reparticiones.

No detendré a la Cámara con informaciones ni comparaciones al respecto. Bastará citar la institución más perfecta del género, que en mi concepto es la de Bélgica, que se trata de imitar en todas partes. En los países donde no ha sido puesta como una función inherente al departamento del trabajo, ha sido porque ya existía la inspección, la que se ha vinculado con él.

Yo entiendo que sería una anomalía dejar en la ley orgánica, después de cinco años de desenvolvimiento, al instituto del trabajo argentino en el mismo pie en que comenzó. Entiendo que dentro de la evolución de la legislación, se puede explicar muy bien que se haya querido dar el carácter de imparcialidad a las funciones de este departamento, privándolo de todo lo que fuera intervención en la acción policial y represiva, porque su creación respondió a medidas de prudencia del legislador, que se encontraba sorprendido por el problema social, que no podía medir en su magnitud ni conocer en su intensidad. En esas condiciones, trataba de buscar medios de investigación y de exploración que le presentaran todos los datos y que lo pusieran en posesión de todos los medios para dominar aquél en todos sus detalles.

Algo hemos avanzado en ese camino. La dirección del departamento del trabajo presenta una labor real, apreciable y útil, que nos pone en condiciones de medir la situación obrera en sus distintas fases. Ahora, es necesario ampliarle su tarea, hacerlo marchar, ya que hasta el presente su carácter no ha sido bien determinado ni su acción había sido claramente marcada.

Además de esta facultad de inspección y de vigilancia, se ha creído necesario, como una forma especial que deba revestir entre nosotros ese instituto, darle funciones relativas al registro de

colocaciones, que lo llame a intervenir en la oferta y la demanda del trabajo.

Es éste un punto de vista muy interesante. Es ventajoso para el Estado tomar intervención en lo que se refiere a la colocación de los obreros, no sólo del punto de vista del beneficio que esto significa para ellos, por el ahorro de dinero, por el ahorro de tiempo y por la mayor seguridad que la intervención del Estado puede ofrecer en el contrato mismo de trabajo, sino también porque responde a esa política que caracteriza nuestra necesaria acción de fomento y de distribución de la población, lo que permitirá evitar graves contingencias, tales como sería la acumulación de obreros en una parte donde haya falta de trabajo, y viceversa, corrigiendo también la desigualdad del reparto de la población obrera. Permitirá, al mismo tiempo, con esta función conocer los grandes problemas que se refieren a la economía nacional en un momento dado, con la información sería sobre salarios, jornada de trabajo, etcétera.

Y será tanto más importante esta función de Estado para nosotros, cuanto que estaría desde ya complementada con su intervención en la distribución que hace actualmente del trabajo de los inmigrantes.

Y es lógico que si interviene para dar colocación al obrero inmigrante, tenga igual cuidado e igual celo para preocuparse del obrero radicado, cuya falta de trabajo puede ser sintomática de un estado de miseria, lacra social que debe corregir, porque tenemos la seguridad de que en nuestro país siempre se la podrá evitar.

Igual beneficio resultará de la inspección de las agencias de colocación para fiscalizarlas en sus actos.

Para que la honorable Cámara se dé cuenta de la importancia que tiene el problema de la colocación del obrero radicado entre nosotros, voy a hacer referencia a una estadística que tengo aquí, facilitada por el departamento del trabajo, sobre el movimiento habido en las 31 agencias privadas de colocación que funcionan en la Capital de la República. Durante los seis primeros meses de este año han colocado 54.828 perso-

nas. Me refiero simplemente a las colocaciones; esta estadística no puede dar idea de lo que es la oferta y la demanda, lo que sería muy interesante saber, puesto que puede haber aumentado o disminuido según las circunstancias.

El despacho de la comisión pone también entre las atribuciones del departamento del trabajo la creación de consejos especiales en los casos de conflictos entre el capital y el trabajo. Entiende la comisión que con esto se da un paso hacia adelante en el sentido de resolver pacífica y prácticamente esos graves conflictos, dentro de los medios que proporcionan los mismos intereses.

Es inútil, señor presidente, tratar de buscar arbitrios para solucionar estas graves cuestiones fuera del orden creado por los hechos mismos. Es la voz del interés la que mueve las huelgas; es la voz del interés la que tiene que terminirlas; y el interés del Estado, a su vez, es el de poner frente a frente las reclamaciones de una y otra parte, para que puedan entenderse y llegar a la solución deseada.

No tendrá, ciertamente, la intervención de estos consejos la significación que le daría un fallo judicial, ni podría tampoco ser exigida como tal; pero tendrá, de todos modos, la significación que le da el prestigio de la misma repartición, el terreno neutral a que es llevada la cuestión, donde las razones tienen que ser medidas, y donde se determinará el apoyo de la opinión pública, que juzgará en definitiva sobre la justicia o la injusticia de las reclamaciones que se hagan; y, con esto, ya se adelanta algo, sobre todo en esos momentos álgidos, en que como he dicho hace un momento, las pasiones se encienden y es muy necesario que los elementos que se mueven sean llamados a explicarse y a entenderse.

No creo que esto sea una expresión legal lírica porque le faltare sanción; no se trata por el momento de dar una ley de conciliación y de arbitraje forzoso; se trata sólo de poner en manos del departamento del trabajo los medios necesarios para que pueda llegar hasta hacer posible el avenimiento, ofreciendo el terreno neutral y el concurso del Estado para la solución.

Los restantes artículos del proyecto dan a los inspectores los medios de realizar debidamente sus tareas, y establecen la obligación de los patrones de suministrar los datos necesarios, que quedarán garantidos bajo una absoluta inviolabilidad; y para acentuar la autonomía con que quiere presentarse esta repartición en su ley orgánica, se le da la personería necesaria para que pueda tener los recursos y recibirlos a fin de asegurar el desempeño de su tarea.

Estas son, señor presidente, las ideas principales que informan el despacho de la comisión que, como se ve, ha conseguido reunir la adhesión de casi todos sus miembros, no obstante las diferencias políticas y las distintas ideas que los separan. Por mi parte, me ha sido muy grato coincidir con todos ellos en apreciar este importante punto de partida de lo que debe ser la política necesaria e imprescindible que lleve a legislar la vida obrera, cuidando de que se establezca sobre ella la protección legal del Estado, que no debe faltar, en mi entender, a los que forman dentro de él, una fuerza esencial de conservación, de riqueza y de progreso.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Palacios—Pido la palabra.

He expuesto, señor presidente, con toda amplitud, mi criterio respecto al departamento del trabajo, en la interpelación que formulara hace pocos días al señor ministro del interior.

Esta circunstancia y el discurso que acaba de pronunciar el señor miembro informante, me eximen de insistir sobre el verdadero concepto de la institución, que debe romper con las rutinas burocráticas tan funestas en nuestro país, para ensayar una acción científica, experimental.

He de decir, sin embargo, algunas palabras, en mi carácter de autor del proyecto relativo a la inspección y vigilancia de las leyes del trabajo, que ha sido estudiado y despachado por la comisión de legislación, conjuntamente con el que presentó el señor diputado Cantilo.

Entiendo, señor presidente, que la función de inspección y vigilancia, ampliamente expresada, debe ser inherente al departamento del trabajo, el cual

sin ella quedaría reducido a una oficina secundaria, incapaz de cooperar al desarrollo del movimiento obrero ordenado y pacífico que se realiza en el país.

Es menester una acción eficaz, en el sentido de imponer el cumplimiento de las leyes obreras, y así lo han entendido los legisladores de los países más adelantados y los autores de las más diversas doctrinas.

Van Overbergh, en el prólogo de su notable libro «Los inspectores del trabajo», dice las siguientes palabras que voy a leer con permiso de la honorable Cámara.

«En el viaje de estudio que váis a emprender, me dijo un día Decurtins—Decurtins es, señor presidente, un escritor católico suizo que sigue las huellas de monseñor Keteller—fijáos principalmente en la cuestión de la inspección del trabajo en las fábricas. Apenas si se sospecha su importancia, pocos la adivinan, algunos la desdennan; sin embargo, es de sanción urgente y necesaria. Se admite la necesidad de refrenar los abusos sociales enormes, causados por el maquinismo bajo el régimen de la competencia ilimitada, se echan de menos leyes protectoras de la vida, y de la salud de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los adultos, y se exige su aplicación inmediata; el clamor es general, pero ¿de qué sirve promulgarlas si no han de aplicarse mientras no exista un cuerpo de agentes investigadores escogidos?»

Es esa la misma manifestación que hiciera sintéticamente el famoso escritor Willoughby, que he tenido oportunidad de citar varias veces en esta Cámara, cuando afirmaba que la experiencia ha demostrado de una manera categórica, en todas partes, que los mejores textos de un código de trabajo resultan letra muerta si no se organiza la inspección para velar por su aplicación.

Este es el concepto general, señor presidente, y por eso en todos los países la legislación se preocupa seriamente de darle sanción. Ya en 1802, Inglaterra, por la acción del célebre Peel, instruyó los inspectores—*visitors*—y los *denunciators*, después, con atribuciones más amplias. La ley Althorpp que es la base de la legislación social ulterior, estable-

ció un servicio completo de inspección, cuyos resultados benéficos se hicieron sentir muy pronto.

En Francia, cuando en 1841 se discutió en el parlamento la primera ley de protección a los obreros, Renouard afirmaba de una manera categórica, en su informe, que sin un sistema de inspección organizarlo, la ley carecería de eficacia.

En Alemania, por ley de 16 de mayo de 1859, se estableció la inspección y se prescribió que la ejecución de sus disposiciones sería vigilada por funcionarios del Estado, designados con el nombre de inspectores de fábrica, que estarían investidos de todos los derechos de las autoridades encargadas de la policía local.

En Suiza, señor presidente, los encargados de la ejecución de la ley federal de 1877 son el consejo federal y los inspectores federales de fábricas.

En Austria, donde el nombre de Migerka, inspector general, es aclamado por el pueblo debido a la obra, realmente noble, que realiza en beneficio de la clase laboriosa, estos funcionarios fueron llamados por Bebel, «procuradores de los obreros», y el ministro Jacquelin ha declarado que el inspectorado de la industria es la institución más popular de la monarquía.

Las últimas leyes sancionadas en Europa, así como los proyectos presentados, aumentan considerablemente las atribuciones de los inspectores que determinan un gran progreso social.

En el dictamen de la comisión de la cámara de diputados de Italia, — que tengo aquí a disposición de los colegas, — redactado en 28 de junio de 1910, se crea un cuerpo de inspectores de trabajo que velarán por el cumplimiento de las leyes sociales.

En una de sus disposiciones se establece categóricamente que los inspectores podrán ocuparse en prevenir o solucionar pacíficamente los conflictos del trabajo, y que tendrán las facultades de entrar libremente, a cualquier hora del día o de la noche, en las fábricas, talleres y trabajos sometidos a su vigilancia; de visitar todos los lugares, así como los locales que se comuniquen con aquellos, y los dormitorios y comedores

contiguos a los establecimientos. En el caso de resistencia o desobediencia a los inspectores del trabajo, serán aplicados, dice el proyecto, los artículos pertinentes del código criminal, sin perjuicio de la penalidad que las leyes establecen.

Por el artículo 41 de la ley presentada en 8 de febrero de 1911 al Landsting en Dinamarca, se establece que el personal de la inspección, una vez demostrada su identidad, tendrá derecho a entrar en todos los locales y talleres comprendidos en la ley del trabajo, a cualquier hora del día y de la noche, siempre que en dichos locales haya alguna persona dedicada a cualquier ocupación o empleo.

También podrán pedir cualquier clase de informes o de datos que necesiten a los que se hallen en las fábricas o talleres.

Estarán igualmente facultados para examinar los registros que se lleven en virtud de la ley, así como los demás que obren en los establecimientos.

Como tuve ocasión de probarlo en su oportunidad, la inspección debe ser una función anexa al departamento del trabajo; y, con mayor razón, en nuestro país, donde tenemos una legislación social incipiente. Este sistema está implantado en casi todos los países civilizados, en Bélgica, Italia, España, Francia, Suiza, etc.

En Norte América, donde a Massachusetts corresponde la gloria de haber fundado por primera vez en el mundo un departamento del trabajo, ejemplo que fué imitado después por los demás estados, como puede verse en el cuadro que entrego en secretaría para su publicación en el «Diario de sesiones»; en Norte América, señor presidente, la inspección es función de instituto, y si en algunos estados constituye un organismo independiente, es debido sólo a la complejidad enorme de la legislación social existente.

El despacho de la comisión de legislación tiende a crear con el departamento nacional del trabajo una institución seria, con relativa autonomía, que le permita realizar una obra útil y eficiente.

Menester es que en nuestro país se encaren los problemas sociales, desde

un punto de vista científico, y no con un criterio estrecho, indigno de un pueblo civilizado.

En el extranjero, desgraciadamente, nos conocen por nuestros desaciertos en esta materia.

El profesor Paul Pie, en su famosa obra de legislación industrial, premiada por la academia de ciencias morales y políticas, hablando de la legislación represiva rusa, página 372, párrafo 517 de la edición de 1909, dice: «Cuando ocurre en Rusia un conflicto por salario entre obreros y patrones, debe ser resuelto por el inspector de fábricas de la circunscripción, y a falta de éste, es la policía la encargada de imponer una solución cualquiera. Esto, agrega, que parecerá extraño en la Europa occidental, es aceptado en Rusia, donde la policía interviene en todas las cuestiones sociales.» Y en la página 993, nota 2 al párrafo 1265, ocupándose de las instituciones de conciliación y arbitraje, dice: «En la República Argentina (como en Rusia) esta misión delicada está confiada de derecho al jefe de policía.» Y cita el famoso decreto de 20 de octubre de 1904, por el cual el Poder ejecutivo establece que ese funcionario debe ser el árbitro en todos los conflictos producidos entre el capital y el trabajo.

Como un homenaje a la civilización, y por el prestigio de nuestras instituciones, declaremos, señores diputados, que ha llegado el momento de descartar en absoluto este criterio policiaco que ve en el movimiento obrero pacífico, delinquentes y agitadores, — y que es necesario fundar definitivamente el departamento nacional del trabajo con el verdadero carácter que le corresponde, a fin de que no sea un organismo raquítico y burocrático, sino una institución beneficiosa para los intereses de todos y que permita la unificación de la acción del Estado en materia de legislación social.

He terminado.

DEPARTAMENTOS DEL TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS

<i>Estados</i>	<i>Fecha de fundación</i>
1 Massachusetts	1869 (1)
2 Pensilvania	1872
3 Connecticut	1873 (2)
4 Ohio	1873
5 New Jersey	1873
6 Indiana	1879
7 Missouri	1879
8 Illinois	1879
9 California	1883
10 Wisconsin	1883
11 New York	1883
12 Michigan	1883
13 Maryland	1884
14 Iowa	1884
15 Estados Unidos.....	1884 (3)
16 Kansas	1885 (4)
17 North Carolina	1887
18 Maine	1887
19 Minnesota	1887
20 Colorado	1887
21 Rhode Island	1887
22 Nebraska	1887
23 Virginia oeste.....	1889 (5)
24 North Dakota.....	1889
25 Tennessee	1891
26 Kentucky	1892 (6)
27 Montana	1893
28 New Hampshire.....	1893
29 Washington	1895
30 Virginia	1898

Sr. Presidente—Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 1.º

Sr. Padilla (M. M.)—Pido la palabra.

Sin entrar a hacer discusión, voy a votar en contra de la dependencia del departamento del trabajo del ministerio de agricultura. No veo que haya una razón especial para esto. Si bien es cierto que el departamento del trabajo en muchos casos debe intervenir en asun-

(1) El primero del mundo.

(2) Suprimido en 1875; restablecido en 1885.

(3) Instituida en 1884 como oficina anexa al ministerio; erijida en departamento en 1888.

(4) Reorganizada por una ley que fué promulgada el 11 de enero de 1899.

(5) El primer informe no se publicó hasta 1894.

(6) Establecida el 20 de marzo de 1876, bajo la forma de oficina de agricultura, horticultura y estadística; reorganizada bajo su denominación actual de "Bureau of Agriculture, labor and statistics" y con atribuciones más amplias el 2 de abril de 1892.

tos que corresponden al ministerio de agricultura, no lo es menos que también debe intervenir en asuntos en que no tiene nada que hacer el ministerio de agricultura, y sí, por ejemplo, el de obras públicas o el de hacienda.

En esta situación, creo que, consecuentes con el propósito de la ley de distribución de los ministerios, debemos dejar el departamento del trabajo donde está, constituyendo la dirección del trabajo, pero dependiendo del ministerio del interior.

Nada más.

Sr. Avellaneda—Deseo que conste mi voto en igual sentido.

Sres. Saavedra Lamas y Varela—Y el mío también.

Sr. Igarzábal—Pido que se vote por partes, pues estoy en el mismo orden de ideas de los señores diputados.

Sr. Presidente—Se votará por partes.

—Se vota: «La actual dirección general del trabajo, se denominará desde la promulgación de esta ley, departamento nacional del trabajo», y resulta afirmativa.

—Se vota: «dependerá del ministerio de agricultura», y resulta negativa.

Sr. Padilla (M. M.)—Propongo, en reemplazo, que se diga: «dependerá del ministerio del interior».

—Se vota en esta forma, y resulta afirmativa.

Sr. Padilla (E. E.)—Pido que se rectifique la votación.

—Se rectifica, y resulta afirmativa de 36 votos.

Sr. Secretario Sorondo—Votan los mismos 65 señores diputados.

—Se vota el resto del artículo y es aprobado, quedando sancionado en la siguiente forma:

Artículo 1.º La actual dirección general del trabajo se denominará desde la promulgación de esta ley «Departamento nacional del trabajo», dependerá del ministerio del interior y tendrá por funciones: preparar la legislación

del trabajo, recogiendo, coordinando y publicando los datos relativos al mismo; y organizar la inspección y vigilancia de las disposiciones legales que dicte el Congreso sobre la materia».

—En discusión el artículo 2.º

Sr. Del Barco—Se pueden dar por aprobados los artículos que no se observen.

—Asentimiento.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento general, así se hará.

—Se da por aprobado el artículo 2.º

—En discusión el artículo 3.º

Sr. Igarzábal—Pido la palabra.

Yo desearía que el señor miembro informante de la comisión tuviera la bondad de decirme si esa inspección y vigilancia habrá de hacerse sólo en la Capital federal y en los territorios nacionales, o si se verificará también en las fábricas de las provincias.

Sr. Padilla (E. E.)—Depende de las leyes cuyo cumplimiento haya que inspeccionar.

Sr. Igarzábal—Yo entiendo, señor presidente, y a eso responde mi pregunta, que si esta inspección y vigilancia, ha de llevarse a cabo en las provincias, la ley sería inconstitucional, y que, en todo caso, esa inspección y vigilancia debiera ser hecha por las provincias mismas.

Por consiguiente, para aclarar el concepto del artículo, propongo que donde dice: «en los establecimientos industriales y comerciales, a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo», se agregue: *en la Capital y territorios nacionales*.

Sr. Padilla (E. E.)—Aquí se trata la inspección y vigilancia de las leyes que se dicten. De manera que cada ley determinará cuál es la jurisdicción.

Sr. Igarzábal—¿Y por qué no establecerlo aquí, señor diputado?

Sr. Padilla (E. E.)—Porque mañana puede dictarse una ley que determine lo contrario.

Sr. Palacios—La observación habrá que hacerla cuando se trate la ley cuyo cumplimiento ha de ser vigilado.

El despacho de la comisión sólo dispone el establecimiento de un servicio de inspección y vigilancia directo y permanente en las fábricas que están sometidas a las leyes que dicte el Congreso. Si estas leyes se refieren exclusivamente a la Capital y territorios nacionales, la inspección y vigilancia será exclusivamente para ellos, y si se refieren a toda la Nación, la vigilancia se hará de acuerdo con la ley.

Sr. Igarzábal—Con lo dicho, dejo constancia de mi opinión respecto de este asunto.

Nada más.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Entre el artículo 3.º y el 4.º hay una contradicción sobre la cual me permito llamar la atención de la comisión respectiva.

El artículo 3.º dice que «el departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente». El artículo 4.º dice que «los inspectores del trabajo, debidamente autorizados, tienen derecho a penetrar en los locales donde se ejerza una industria durante las horas destinadas al trabajo».

¿Cómo se va a realizar la inspección permanente si no van a poder penetrar los inspectores a los establecimientos sino en las horas de trabajo?

Sr. Padilla (E. E.)—Esta inspección se realiza durante la vigencia de los horarios de trabajo, y en este sentido es permanente, para que no se infrinjan las leyes que se dicten.

Sr. Atencio—Yo estoy conforme con la redacción del artículo 3.º, y precisamente quería que la comisión emitiera opinión sobre el particular, porque me parece que lo que habría que modificar es el artículo 4.º.

Es posible que la presencia del inspector conviniera solamente en las horas de trabajo; y entonces habría que eliminar de la redacción del artículo esa parte. Convendría, pues, establecer en el artículo 4.º que podrán los inspectores visitar los establecimientos en esas horas.

Sr. Presidente—¿Está conforme el señor diputado con el artículo 3.º?

Sr. Atencio—Sí, señor; siempre que en el artículo 4.º se establezca esa disposición.

Sr. Presidente—Ese artículo no está en discusión.

Sr. Atencio—Debo hacerlo presente antes de votar en favor del artículo 3.º.

Sr. Presidente—Se dará por aprobado el artículo 3.º...

Sr. Castillo—Pido la palabra.

No obstante la indicación que ha formulado el señor diputado por Córdoba y las consideraciones que ha aducido, creo que no queda bien resuelto un punto de capital importancia.

En toda la economía de la ley se observan disposiciones de carácter trascendental, y es necesario, entonces, decir categóricamente si se trata de una ley de jurisdicción federal o de jurisdicción nacional; o en otros términos, si esta ley sólo ha de tener aplicación en la Capital federal y territorios nacionales, o si ha de tener fuerza en todo el territorio de la República.

Deseo una contestación clara y neta de la comisión.

Sr. Padilla (E. E.)—Pido la palabra.

Es preciso que el señor diputado se dé cuenta de que se trata de una ley que determina la carta orgánica del departamento y que va a poner en aplicación leyes actuales y leyes futuras que dictaría el Congreso. La jurisdicción la van a determinar precisamente esas leyes. Entretanto, no es necesario fijarla, porque la acción del departamento del trabajo tiene que ejercitarse, para los fines de la inspección de vigilancia, dentro del cumplimiento de aquellas que existen actualmente y que se refieren a la capital de la República y territorios nacionales. Para los fines de estudio, de coordinación y de preparación, tiene que extenderse, desde luego, a toda la República, puesto que sólo así podrán plantearse y resolverse los problemas que a todos nos interesan, sin que por esto se afecten en lo mínimo las autonomías locales.

A las provincias irá por ahora con el objeto de investigar y recoger elementos de estudio, como ha hecho hasta ahora. Es así que ha estudiado los problemas obreros interesantes de la industria vitivinícola, de la industria azucarera, como el que se relaciona con el corte de las maderas, en fin, ha acumulado datos sobre los distintos proble-

mas que plantea el trabajo en nuestro país. Privar de esas investigaciones al departamento, sería reducirlo, en esta faz tan trascendental de sus funciones, al rol de una oficina municipal.

No veo por qué se puede sentir molestado el sentimiento de la autonomía local con permitir que el departamento siga ejerciendo esta acción, que produce tantos bienes al país, puesto que con ella ha conseguido poner en claro algunos hechos que pasaban totalmente desapercibidos, no obstante la gravedad que revestían. Podría citar todas las estadísticas que ha publicado sobre los salarios que se pagan en distintas provincias, que ha hecho un bien inmenso a la clase trabajadora del interior, contribuyendo también a que se salven, por parte de los patrones, muchas de las deficiencias que existían en lo relativo a la habitación y el régimen de vida de sus empleados.

Sería, a la vez, imperdonable que el departamento del trabajo no pudiera tener los medios necesarios para ilustrar a los patrones del interior del país, lo mismo que a los obreros, sobre las condiciones que les permitan evolucionar en el sentido de una mejora recíproca. Y vuelvo a insistir en que esto no puede afectar en lo mínimo la autonomía de las provincias, mientras la ley no lo exprese se recogerían los elementos de estudio, de investigación, para formular reformas legislativas que vendrían al Congreso.

Sr. Igarzábal—Pido la palabra.

Noto, muy complacido, señor presidente, que las opiniones expresadas por el señor miembro informante de la comisión coinciden con las que yo había manifestado antes de ahora muy brevemente.

El miembro informante de la comisión manifiesta que la misión a llenarse por el departamento del trabajo en las provincias sería la de preparar la legislación del trabajo, recogiendo, coordinando y publicando los datos relativos al mismo, cláusulas que, por otra parte, hemos sancionado ya sin observación en el artículo 1.º del proyecto.

En cuanto al artículo 3.º, de que se trata, el señor diputado dice...

Sr. Padilla (E. E.)—Está en discusión el artículo 4.º

Sr. Olmedo—No está aprobado.

Sr. Igarzábal—Perfectamente.

En cuanto al trabajo a hacerse en las provincias, se reduciría sólo a una investigación, a una coordinación de datos, y con ello estoy muy conforme, por cuanto no se atenta contra las autonomías de las provincias; pero yo no lo aceptaría en lo que se refiere a inspección de fábricas.

Sr. Padilla (E. E.)—¡No nos entendemos!

Sr. Peña—Pido la palabra.

Yo voy a apoyar la petición hecha por el señor diputado por Catamarca, de que se precise la jurisdicción del departamento nacional del trabajo en las diversas funciones que se le encomiendan.

Así como está el proyecto, consagra la jurisdicción del departamento en todo el territorio de la Nación para los fines que se especifican. Tiene facultades para inspeccionar los establecimientos industriales tanto en la Capital como en las provincias y el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo: se le autoriza a intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo, y a numerosas funciones que, si hubieran de ejercitarse por el departamento en el territorio de las provincias, importarían un desconocimiento de la jurisdicción constitucional propia de las mismas.

Sr. Padilla (E. E.)—¡Pero demuéstrello, el señor diputado!

Sr. Peña—El proyecto presentado con el dictamen del señor diputado, lo está demostrando.

Sr. Padilla (E. E.)—¡Pero demuestre un caso, señor, dentro del proyecto!

El señor diputado está haciendo una abstracción. Yo lo puedo decir, respecto de la inspección y vigilancia, que están claramente establecidas las funciones que se confieren al departamento del trabajo, en cuanto a las leyes que se dictan. Pero es claro que si estas leyes no se dictan, esas funciones no tienen razón de ser.

Hoy la función de inspección está reducida sólo a lo que se refiere a las leyes de trabajo de las mujeres y de los niños, y de descanso dominical, que

son de mayor aplicación para la capital de la República. Queda ahí detenida por de pronto: el mismo Congreso dirá más adelante lo que va a hacerse. Pero no se venga a destrozar el concepto de lo que ya existe como una conquista administrativa y cuya aplicación la han podido sentir los señores diputados desde el principio, desde que fué creado el departamento del trabajo.

El doctor Matienzo decía en su proyecto, mandado el 18 de marzo de 1907, cuando se constituyó esa oficina: «Me propongo organizar, desde luego, el servicio de estadística e información con los elementos que vuestra excelencia se ha servido poner a mi disposición y atender a la vez, en cuanto sea posible, al estudio de las reformas más urgentemente reclamadas en la legislación civil para proteger más eficazmente el derecho del trabajador.»

«A este respecto, considero oportuno anunciar a vuestra excelencia que he de preocuparme muy especialmente de proponer medidas de un alcance general para toda la República («de proponer medidas») ya que los beneficios de la nueva institución deben ser nacionales, sin perjuicio de las disposiciones separadas y especiales que el gobierno federal pueda dictar en los lugares donde ejerce jurisdicción inmediata y exclusiva.»

Ahora, señor presidente, yo deseo que se señale el caso posible, dentro del proyecto que se tiene por delante, de esta invasión de las jurisdicciones locales, que todos queremos respetar por igual. Yo no sé si he tenido la fortuna de explicarme bien, si he podido transmitir claramente la intención con que el proyecto fué redactado, cosa que, por lo demás, se desprende de sus términos. Vuelvo a repetirlo: la inspección y vigilancia se refiere, por ahora, a las leyes que se hayan dictado o que dictare el Congreso. En las leyes futuras será el momento de determinar su aplicación y ampliación. Pero, fuera de esas leyes, el departamento nacional del trabajo puede y debe extender su acción al resto del país, aportando preciosos elementos de observación, prestando los grandes beneficios que hasta hoy ha producido.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Había formulado observaciones relacionadas con los artículos 3.º y 4.º del proyecto y había entendido, al dar mi voto por el artículo 1.º, que la ley no tenía sino un carácter federal, es decir, un carácter local. Las manifestaciones que hace ahora el señor miembro informante de la comisión parecerían indicar que éste no ha sido el pensamiento, o el propósito de la comisión y del proyecto.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Aún no ha terminado el señor diputado.

Sr. Atencio—Pero es visible el hecho, y lo puede comprobar cualquiera de los señores diputados, leyendo el proyecto en toda su extensión, que ese pensamiento, que ese propósito a que el señor miembro de la comisión se refiere, no está consignado en ninguna parte de la ley, no está establecido de una manera categórica.

Precisamente, señor presidente, la legislación del trabajo ha tropezado con dificultades especiales en los países de instituciones federales como el nuestro. Es por eso que la organización de la oficina del trabajo en Bélgica y en Francia es una organización perfecta, mientras que la organización de la oficina federal del trabajo en los Estados Unidos es incompleta e incipiente, porque cada uno de los estados federales de la Unión tiene organizado su departamento del trabajo, como lo ha dicho el señor miembro informante de la comisión.

Resulta ahora que, inesperadamente, por la indicación del señor diputado por Catamarca, ha venido aquí a surgir una cuestión trascendental, que la mayor parte de los señores diputados, al votar el artículo 1.º, no la habían tenido presente, porque seguramente le dieron al artículo la misma interpretación que yo le había dado.

Ahora, si se trata de dar a esta ley el alcance que dice el señor presidente de la comisión de legislación, sería indispensable que ello se estableciera de una manera categórica. Aquí se involucra en el artículo 1.º tanto lo que se refiere a la inspección del trabajo como lo que se refiere a los proyectos de legislación. Entretanto, el departamento nacional

del trabajo puede realizar o hacer más intensa su obra en las provincias, esa obra que está realizando en la actualidad, pero que la está realizando en una forma incompleta, porque no tiene los resortes eficaces, que son los que derivan de la existencia de la oficina de inspección, porque los industriales o los comerciantes pueden dar o no los informes. El actual departamento del trabajo no tiene eficacia para investigar respecto de su exactitud, porque carece del único resorte eficaz que existe en todos los departamentos de trabajo del mundo, que es la inspección, precisamente.

Ahora bien: ¿la inspección va a tener un alcance nacional? Ahí vendría la observación, muy fundamental, que ha hecho el señor diputado por Catamarca. Para que así se entendiera, sería menester establecerlo en la ley. ¿Pero hasta dónde podría el Congreso establecer semejante disposición? ¿Es ésta una de las leyes de fondo que la Constitución ha permitido que sean sancionadas por el Congreso; o es una ley de otro carácter que sólo puede regir en los territorios federales? Es un punto especialmente grave, que conviene que se discuta o que se estudie, ya que inesperadamente se ha presentado.

En mi concepto, el artículo 1.º viene a legislar para la Capital y territorios federales. Y si éste no hubiera de ser todo el alcance de la ley, habría que meditar un poco antes de resolverlo de otra manera.

Mis observaciones, como he dicho, tendrían a una cuestión de detalle en el artículo 3.º, pero creo que podríamos reconsiderar la resolución respecto del artículo 1.º, para discutir a fondo la cuestión.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Voy a hacer una consideración retrospectiva, que tal vez induzca a la Cámara a no hacer tanto hincapié en este detalle referente a si la legislación que se proyecta alcanzará al territorio entero de la Nación o sólo a una parte de él.

La primera ley sobre el trabajo que se dictó en este país, relativa al descanso dominical, ley favorable a los trabajadores, fué limitada en sus efectos a la Capital y territorios naciona-

les, a pesar de que el domingo debe descansar en todo el país, porque los hombres se fatigan lo mismo en todos los puntos del territorio y de que en el interior es donde hasta por razones religiosas, más necesario sería aplicar dicha ley y respetarla.

Sr. Alencio—¡Pero en esos estados existen leyes especiales!

Sr. Justo—Vino después otra ley, también relativa al trabajo, y favorable a los trabajadores, la que reglamenta el trabajo de las mujeres y de los niños, que en todo el país son dignos de la más exacta y minuciosa vigilancia, de parte de los poderes públicos, en lo que se refiere a su salud y a las condiciones del trabajo. Esa ley también fué limitada en sus efectos a la Capital y territorios nacionales, aunque en todo el territorio de la República se explota cruelmente a las mujeres y niños.

Y, por último, la tercera ley relativa al trabajo—la ley llamada social, dictada en el año del Centenario—que contiene cláusulas relativas a las huelgas y a las asambleas obreras, a las reuniones de obreros que se hacen todos los días, que deben hacerse continuamente, como un carácter esencial y necesario de la actual vida de la clase trabajadora en los países modernos; y esa ley se dictó por el Congreso argentino sin que se suscitara ni por un momento la cuestión de si sus alcances serían locales o generales: se dió por sobreentendido que sería nacional, que regiría en todo el territorio; y así se ha aplicado, aun torcidamente, aun en casos especiosos y en casos en que no había ninguna disculpa ni pretexto para aplicarla, en lugares que estaban fuera de la Capital y de los territorios nacionales. Hace poco se ha amenazado a arrendatarios de la provincia de Córdoba con aplicarles la ley llamada social, del Centenario, atendiéndose a su jurisdicción nacional.

Sería triste, pues, que ahora que venimos por tercera vez a dictar una ley que interesa a los trabajadores, chocáramos con este gran escrúpulo: si será de aplicación local o general. Conven-gamos en que no es necesario poner tanto los puntos sobre las íes en cuestiones de este orden.

La reglamentación del trabajo es una

cuestión nacional. Bien podemos tener leyes interprovinciales sobre el trabajo, cuando la legislación del trabajo en el mundo es internacional.

Se sostiene como una necesidad, señores diputados, que las reglamentaciones sobre el trabajo no sólo deben ser nacionales, sino internacionales, porque de otra manera las condiciones de la producción variarían mucho de un país a otro, y la competencia capitalista se haría en condiciones desiguales en los distintos lugares, desfavorables en el país donde se reglamentara el trabajo. Sólo que los diputados de alguna provincia argentina quieran hacer un privilegio para su zona, dejando a los trabajadores de aquella parte del país completamente a merced de los patrones de la región...

Entiendo, pues, que la oposición que se hace en este momento al proyecto en discusión, basándose en si ha de ser de alcance local o general, se podría interpretar en un sentido desfavorable para el espíritu general de la Cámara, se podría tomar como la expresión, no de aspiraciones provinciales de autonomía, sino de aspiraciones patronales de ciertas regiones del país, que es mejor que no estén aquí tan fielmente representadas.

He terminado. (*Aplausos en la barra.*)

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Sr. Peña—Pido la palabra.

Sr. Atencio—He pedido la palabra.

Sr. Peña—¡Es que va a hablar un diputado que es menos patrón que el señor diputado por la Capital, doctor Justo! (*Risas.*)

Sr. Atencio—Se la cedo al señor diputado.

Sr. Peña—No se trata, señor presidente, de hacer un caso sobre las cuestiones que tanto animan y apasionan al señor diputado por la Capital. Los que hemos hecho la observación, proponemos un caso constitucional, un caso de respeto a la esfera propia del derecho provincial, esfera que, por definición, comprende el ejercicio pleno de toda función de policía.

Sr. Castillo—Es así.

Sr. Peña—No quiero decir que el Congreso de la Nación carezca de atribuciones para dictar reglas sobre el trabajo de carácter general. En muchos

aspectos de la lucha entre el capital y el trabajo, bien puede proceder la ley general, pero lo que en ningún caso corresponde por nuestro derecho es la jurisdicción nacional en la ejecución o el cumplimiento de esas leyes. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Esto está exclusivamente reservado a las provincias por nuestra Constitución, y no es en nombre de un interés de una provincia, sino en nombre de un interés nacional; no hablo como representante de provincia, que aquí no lo somos, sino hablando como representante de la Nación y velando por nuestras instituciones, que reclamamos, señor, una aclaración en la ley, para que en forma alguna pueda ser interpretada luego como que la Nación ha de ir a ejercer poderes de policía dentro del territorio de las provincias! (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

El señor diputado por la Capital hacía referencia a preceptos de la ley social que son aplicables en las provincias. La ley social es una ley nacional; la ley social es eminentemente penal; y el señor diputado por la Capital no podrá referir un solo caso en que la Nación haya ido en el territorio de una provincia a ejecutar o aplicar los preceptos de esa ley social. ¡Y si se hubiera presentado ese caso, sería un caso de invasión de la esfera propia del derecho de provincia por parte de la Nación! (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Palacios—¿Me permite el señor diputado?...

Las leyes del reposo hebdomadario y del trabajo de las mujeres y de los niños son también leyes de carácter civil, y, por lo tanto, pueden ser leyes generales, sin violar el precepto constitucional.

Sr. Peña—Ya llegará el momento de discutirlo.

En la práctica se ha reconocido que son materias del derecho propio de provincia, y existen en todas o en la mayor parte de las mismas leyes que amparan esos derechos; y yo sé por qué hemos de considerar que únicamente la representación nacional ha de saber cuidar o atender diligentemente intereses que han sido confiados por nuestra Constitución a las instituciones provinciales. ¿Acaso están compuestas las provincias

de otros elementos que los que constituyen la Nación, acaso cuando se ha despertado la conciencia jurídica sobre una necesidad racional en el país, no se ha sentido con el mismo imperio en la capital de la República que en las provincias?

¡No, señor! ¡Sí, formamos una sola entidad, y cuando se ha sentido o se ha palpado una exigencia de lo justo o de lo bueno, compenetrando, toda la masa de la Nación, no han quedado ¡no, señor! las provincias retardadas en cuanto a satisfacerlas, porque no tiene dos almas el pueblo argentino, una nacional y otra provincial; es una sola y palpita del mismo modo en todo el territorio de la Nación cuando una necesidad racional se siente! (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

De lo que se trata es de que esta ley, tal como está redactada, por la generalidad de sus términos, podría muy bien dar ocasión a que sea invadido el derecho de provincia, invadido en su esencia, en su substancia, en su función de policía, en lo que importa una acción directa de la autoridad; y allí donde una autoridad nacional tiene acción directa sobre el ciudadano de provincia o sobre la fábrica de provincia, allí, señor, está conculcado, allí, señor, está violado el derecho federativo!

Es por esto que se impone que esta ley, de términos tan generales, y que comprende atribuciones de tan variada naturaleza, conferidas al departamento nacional del trabajo, precise la función jurisdiccional de éste en sus atribuciones de inspección, en cuanto ejercitará autoridad, que debe limitarse o concretarse, en nuestra opinión, a la capital de la República y a los territorios federales.

La ley dice, señor presidente, que corresponde al departamento nacional del trabajo intervenir en los conflictos entre el capital y el trabajo, exista o no ley sobre esos conflictos. La atribución se le confiere; y desde el momento que no se precisa límite para ejercitarla, ha de interpretarse como que es ley de la Nación la que la acuerda; y como que al departamento se le da la denominación de nacional, en su mayor latitud y el departamento del trabajo o la autoridad nacional intervendrá así en todo

conflicto entre patrones y obreros, sea cualquiera el punto del territorio de la República en que se produzca, es, entonces, necesario aclarar lo que se desea, para prevenirse de nuevas invasiones de las autoridades nacionales en el dominio jurisdiccional privativo de las provincias.

Yo apoyo decididamente la indicación hecha por el señor diputado por Catamarca, de que se resuelva el punto relativo a saber si el departamento nacional del trabajo ha de ejercer su jurisdicción de policía y demás funciones que se le atribuyen, en la capital de la República o en todo el territorio de la Nación. No eludamos la resolución de esta cuestión so pretexto de que futuras leyes tendrán oportunidad de establecerlo, puesto que esta es la ley general de la materia y es en ella donde deben quedar precisadas la atribución y jurisdicción controvertidas.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!—Aplausos.*)

Sr. Bas—Pido la palabra.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Sr. Palacios—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Permítanme los señores diputados. La ha pedido con anterioridad el señor diputado por Córdoba.

Sr. Atencio—Yo tengo que replicarle al señor diputado preopinante.

Sr. Bas—Pero yo soy miembro de la comisión de legislación, y como tal, me corresponde hacer uso de ella en primer término.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bas—Desearé manifestar que, aunque este despacho no lleva mi firma, he manifestado mi conformidad, con algunas pequeñas diferencias, de que me he de ocupar en oportunidad; y al hacerlo, he entendido que, dentro del concepto establecido por la legislación, era de aplicación exclusivamente para la Capital y territorios federales.

Por consiguiente, dentro de este concepto, y a fin de salvar la divergencia que se ha suscitado ante la honorable Cámara, yo me permitiría expresar de mi parte el deseo de que la comisión accediera a la manifestación y al pedido del señor diputado Igarzábal, de que se concretara en el artículo 3.º que la ins-

pección, vigilancia y permanencia en los establecimientos industriales y comerciales, se refiere a la Capital y a los territorios federales.

Sr. Palacios—Pido la palabra.

Para hacer una observación, o una aclaración a lo que acaba de exponer el señor diputado Bas.

Sr. Atencio—Yo había pedido anteriormente la palabra.

Sr. Palacios—Como el señor diputado Bas ha hablado en su carácter de miembro de la comisión de legislación, yo deseaba contestarle en el mismo carácter.

Sr. Atencio—No tengo inconveniente.

Sr. Palacios—Debo hacer notar que me sorprende la disidencia del señor diputado Bas, porque en el seno de la comisión, después de discutir el asunto ampliamente, quedamos de acuerdo todos los miembros, en que el departamento tendría carácter general.

Sr. Bas—Absolutamente.

Sr. Palacios—Por otra parte, es tanto más extraña esta disidencia que el señor diputado expresa en este momento, cuanto que en el primer artículo votado por él se dice que el departamento ha de ser nacional...

Sr. Castillo—Justamente a eso me iba a referir.

Sr. Palacios—... y si es nacional, no es posible que el señor diputado haya creído que se trata simplemente de jurisdicción particular.

Sr. Bas—Por circunstancias especiales, no he concurrido a ninguna de las reuniones de la comisión en las que el señor diputado Palacios me hace aparecer como presente y aceptando la manifestación a que se refiere, respecto al carácter de esta institución.

Sr. Palacios—Pero debo recordar al señor diputado que he conversado particularmente con él fuera de la comisión y que me ha manifestado su conformidad con esa parte del despacho.

Sr. Bas—Me ratifico: estoy completamente conforme con los términos de la ley.

Sr. Presidente—Debo recordar a la honorable Cámara que hay una moción previa de reconsideración, formulada por el señor diputado Atencio.

Sr. Castillo—Pido la palabra.

Para hacer una indicación de orden.

En presencia de las dificultades enunciadas, voy a pedir que la Cámara diera a una indicación muy benévola que me propongo hacer, para que el asunto vuelva a comisión...

Varios señores diputados—¡No! ¡No!

Sr. Palacios—¡No, señor!

Sr. Padilla (E. E.)—Se está haciendo, señor presidente, una discusión de lo que no puede provocarla.

Sr. Palacios—Cada vez que esta Cámara ha tratado leyes beneficiosas para los obreros, se ha provocado esta interminable discusión que obstaculiza el despacho estudiado con cariño por la comisión de legislación.

¡Votemos, señor presidente!

¡Aparecen los escrúpulos cuando se trata de la salud de las mujeres y de los niños y del descanso de los hombres, pero no cuando se trata de la ley sanitaria que vela por la salud de los animales! (*Aplausos en la barra.*)

Sr. Castillo—Ya que ha levantado resistencias mi indicación de que el asunto vuelva a comisión, voy a dar las razones en que la fundaba.

El señor miembro informante de la comisión ha abundado en consideraciones,—si no he entendido mal—para demostrar que en el espíritu de la ley y en el propósito de la comisión entra el de que esta ley sea de jurisdicción federal, es decir, de alcance y aplicación sólo en la capital de la República y en los territorios nacionales.

Sr. Padilla (E. E.)—En cuanto a inspección y vigilancia.

Sr. Castillo—¡Muy bien! en cuanto a inspección y vigilancia; lo que quiere decir que es en cuanto a toda la acción que este proyecto de ley confiere a las autoridades que crea.

Entonces, si esta es la opinión de la comisión, se me ocurre que la misma comisión podría armonizar su opinión con el texto de los artículos que proyecta, porque el texto de los artículos dice evidentemente todo lo contrario de lo que ha manifestado la comisión.

Al discutirse el artículo primero de este proyecto, iba a oponerme a la denominación de «Departamento nacional del trabajo», porque realmente sería in-

congruente que así se llamara esta repartición y que su acción fuera de carácter federal o local.

Para fundar esta consideración, recordaré otra ley, que fué también discutida por las mismas razones: me refiero a la ley de lotería de beneficencia nacional. Se discutió ampliamente el carácter de esta ley y su alcance, en el honorable Senado, del que formaba parte entonces el general Mitre. Mientras todos discutían el alcance de la ley con el nombre de ley de lotería nacional de beneficencia, el general Mitre, atinadamente, dijo: No: el beneficio será nacional, pero la ley no puede tener carácter nacional, porque ello importaría invadir la jurisdicción propia de las provincias. De ahí vino que se le haya dado el nombre de ley de lotería de beneficencia nacional, porque sólo el beneficio se distribuiría en toda la República, mas no la jurisdicción de la ley, y prueba de ello es que en aquella ley se establecía que las provincias que autorizaran loterías locales no tendrían derecho a participar de los beneficios de la ley nacional.

Después de eso, se han dictado las leyes que ha recordado el señor diputado Justo—la ley de descanso dominical, la que reglamenta el trabajo de las mujeres y de los niños,—leyes exactamente iguales a ésta, en su propósito y en su manera de cumplirse; y en todas ellas ha prevalecido el concepto exacto de las instituciones federales, porque se ha establecido claramente que estas leyes son de carácter policial, que demandan la acción inmediata de las autoridades sobre cosas y sobre personas, y, siendo así, no tiene facultad el honorable Congreso para dictar leyes que confieren esta clase de atribuciones a funcionarios dependientes del gobierno de la Nación, que deban ejercerlas en las provincias.

Las consideraciones que han hecho los señores diputados Peña y Atencio son suficientemente fundadas para llamar la atención de la honorable Cámara sobre este asunto, en el sentido de que no es posible que esa ley pase sin una aclaración bien determinada, para evitar ambigüedades que pueden originar conflictos jurisdiccionales sin razón de ser.

Este es el motivo de mi observación primera; y si no se hiciera una aclaración en el sentido indicado, me veré obligado a votar en contra.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Me parece señor presidente, que deberíamos empezar por reconsiderar el artículo 1.º, ya que estamos discutiendo sobre él. Después pediré la palabra, a fin de replicar al señor diputado por la Capital.

Sr. Presidente—El señor diputado por Catamarca ha hecho una moción, que es previa, para que vuelva el asunto a comisión.

Sr. Castillo—Parece que no la ha aceptado la comisión.

Sr. Atencio—Pido que reconsideremos el artículo 1.º

Sr. Presidente—Debe votarse, entonces, la moción del señor diputado por Buenos Aires, que también es previa.

La presidencia necesita saber si está suficientemente apoyada la moción de reconsideración, pues requiere el apoyo de un tercio de los miembros presentes.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Sr. Peña—Voy a hacer una proposición que creo que consulta todas las opiniones: que al final del artículo 3.º se agregue: «en la Capital de la República y territorios nacionales».

Sr. Padilla (E. E.)—Pido la palabra.

Por mi parte, señor presidente, no hay inconveniente ninguno en aceptar la modificación propuesta por el señor diputado Peña, en lo que se refiere a las funciones de inspección y vigilancia, porque he dicho claramente que esas funciones se refieren por ahora a la aplicación de las leyes que tiene dictadas el Congreso, y a medida que se dicten las leyes que faltan, en ellas se determinará la jurisdicción. En cuanto a la otra función de estudio, de preparación de datos, de coordinación, debe ser extendida a todo el territorio, aunque no fuera más que porque así está establecido sin protestas y con beneficios por la acción del departamento.

Este beneficio puede señalarse, con sólo considerar que, con la publicidad de los datos sobre salarios, hoy no habrá patrón en la República que se atreva a pagar ocho pesos mensuales a los obreros; hoy no habrá patrón en la Re-

pública que se atreva a explotar a los hombres que están a su servicio, una vez puestos en juego los medios de información y de control que han de poner en luz sus actos, y que ha de establecer la competencia para el trabajo de los que estén mal pagados.

Yo creo que sería retroceder en el camino andado querer limitar esta acción de estudio y preparación de datos a una función puramente local.

Sr. Castillo—Perdóneme el señor diputado. No nos oponemos a que se hagan todas estas cosas, a que se estudien estas gestiones y se enseñe al pueblo.

Sr. Peña—Pido la palabra.

Sr. Presidente—¿Ha terminado el señor diputado por Tucumán?

Sr. Justo—Yo había pedido la palabra antes.

Sr. Presidente—¿Para hablar sobre la moción de reconsideración?

Sr. Justo—Sobre el fondo del asunto.

Sr. Atencio—Señor presidente: yo he solicitado la palabra, y entiendo tenerla. He hecho moción de reconsideración para poder hablar yo mismo y para que puedan hablar los demás señores diputados sobre este punto, porque parece que es elemental esto.

Estamos discutiendo un artículo que ha sido sancionado por la Cámara, y se hace necesaria la reconsideración, no para rechazarlo, sino para aclararlo.

Sr. Presidente—Sírvese precisar la moción el señor diputado.

Sr. Atencio—De reconsideración del artículo 1.º

Sr. Peña—Creo que todo se salvaría, y lo iba a proponer a la comisión, estableciendo el artículo 3.º de este modo: «El departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo en la Capital y en los territorios nacionales.»

Eso es lo que hay que cuidar: la función de policía interna. Con esto, queda salvado todo.

Sr. Atencio—Como acepto esta fórmula, retiro mi moción de reconsideración, y voy a hacer uso de la palabra, si es que puedo.

Sr. Presidente—La había solicitado antes el señor diputado por la Capital, pero hizo presente que en su oportunidad haría uso de ella.

Sr. Atencio—En mi concepto, el señor diputado por la Capital al hacer sus observaciones—y siento que en esta réplica voy a tener que referirme al señor presidente de la comisión de legislación—ha dado a nuestras observaciones una interpretación errónea, completamente gratuita.

No nos hemos opuesto absolutamente a nada, no hemos propuesto nada; sólo hemos propendido a que la ley se aclare.

Pero, parece que el señor diputado por la Capital, al hacer sus observaciones, hubiera olvidado la índole de nuestras instituciones, que rige en la República Argentina el régimen federal, y que cualesquiera que sean las condiciones de humanidad en que se encuentren los niños y las mujeres,—para los cuales tenemos tanta consideración y respeto como él,—y aunque sean muy grandes las razones que haya para que al referirnos nosotros, en la legislación, a los niños y a las mujeres, tengamos muy presente su situación, es indudable que, por sobre todo eso, está la Constitución, están las instituciones.

Nosotros debemos legislar sobre lo que tenemos derecho a legislar y las provincias deben legislar sobre lo que tienen derecho a legislar.

El señor diputado por Córdoba ha dicho con mucha razón: ¿pero acaso las provincias no son capaces de legislar en esta cuestión, o en cualquier otra en que tengan derecho a hacerlo, con la misma eficacia que lo hacen los representantes del pueblo en el Congreso?

El señor diputado por la Capital sabe que la mayor parte de las provincias argentinas ha dictado las mismas leyes de esta naturaleza que la Nación. En la provincia de Buenos Aires existe la ley de descanso, mejor que la que rige en la Capital federal, porque aquí el descanso es dominical y en la provincia de Buenos Aires es hebdomadario, es decir, más aceptable y más apropiado a la naturaleza del medio, pues nosotros tendremos que modificar muy pronto la ley de descanso dominical,

que es deficiente, precisamente por ser dominical.

Sr. Igarzábal—En la provincia de Córdoba está en vigencia desde hace muchos años la ley de descanso dominical.

Sr. Atencio—Y en muchas otras provincias, también.

Sr. Palacios—¿Si me permite el señor diputado?

El señor diputado está equivocado cuando cree que por nuestro régimen institucional no se pueden dictar disposiciones de carácter general relativas a la disminución de las horas de trabajo o al reposo, cuestiones que forman parte del contrato de trabajo como éste a su vez del Código civil, materia que debe legislar el Congreso para toda la Nación.

Le observo, asimismo, que la ley relativa al trabajo de las mujeres y de los niños contiene disposiciones que se refieren especialmente a la Capital y territorios nacionales, y prescripciones para las provincias.

El argumento del señor diputado es deleznable. En naciones de instituciones federales y que son un modelo, como la Suiza, la legislación del trabajo es nacional. Ejemplo, la ley federal del año 1877.

El caso de Norte América es distinto, porque allí los estados dictan sus códigos. No obstante eso, en ese país se realiza una tendencia favorable a la unificación de las leyes del trabajo.

De manera que es un error lamentable, el del señor diputado.

Sr. Atencio—Es que el señor diputado nos atribuye manifestaciones que no hemos hecho.

Sr. Palacios—Acaba de decir que el régimen constitucional prohíbe dictar leyes generales del trabajo.

Sr. Atencio—Mis palabras han sido dirigidas en el sentido de que se aclare la ley, y en el curso de mis observaciones, tanto el diputado que habla como los demás señores diputados que han enunciado la misma idea, hemos manifestado la conveniencia de establecer una limitación a fin de que el Congreso no extralimite sus facultades.

No nos hemos referido absolutamente

te al caso tal o cual; porque, efectivamente, el Congreso tiene facultades para legislar sobre muchas materias, incluso la que contiene este proyecto, en un sentido nacional. Podría ser de índole nacional esta materia si se incorporara de una manera expresa al Código penal vigente; si todas las cláusulas de la ley del trabajo, como una ley de orden público...

Sr. Palacios—No está incorporada al Código penal; la ley de orden social importa también una restricción del derecho de reunión.

Sr. Atencio—Pero ¿qué necesidad existe, en este caso, de que nos apartemos de la cuestión para ir a legislar sobre materias que no necesitan ser legisladas?

Por otra parte, cuando se trata de investigaciones, cuando se trata de estadística, la Nación puede hacer esa tarea, como la ha venido haciendo, sin necesidad de modificar la ley; pero, cuando se trata de intervenir por medio de la inspección en las fábricas y casas de comercio, la cuestión cambia de aspecto.

Mi colega el señor diputado por Córdoba ha propuesto una fórmula con la cual estoy de acuerdo. No he promovido esta cuestión; me he preocupado de un aspecto distinto; pero, me felicito de que mis palabras hayan dado por resultado este debate, que, en cierto modo, viene a permitir la aclaración de la ley, que es el objeto que me propuse.

Sr. Cantilo—Pido la palabra.

Este debate alrededor de la Constitución va a someter a prueba la sanción de este proyecto, si continuamos en él.

Creo que el debate está agotado. Estamos completamente de acuerdo; nadie ha pretendido invadir la jurisdicción de las provincias. Entonces, sería oportuno, y a que el señor miembro informante ha dilucidado con sus respuestas el caso en discusión, que se proceda a votar, a no ser que queramos correr el riesgo de quedarnos sin número y de que quede pendiente la proposición para otro día.

Sr. Presidente—¿La comisión ha aceptado e. agregado?

Sr. Padilla (E. E.)—No he podido consultar la opinión de mis colegas de comisión, pero estoy inclinado a aceptar la enmienda que tiende a aclarar el concepto de la ley.

Sr. Galigniana Segura—Que se vote con el agregado.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Para oponerme a toda modificación del texto del artículo.

Está bastante claro para que la duda o la seguridad se haya presentado al espíritu de los señores diputados, que se han opuesto a él tal como está, porque encuentran en este artículo una amenaza a la llamada autonomía de las provincias en el terreno de la inspección del trabajo. Yo creo que lo es y que debe serlo, y que el artículo está bien en esa forma.

Noto que en la honorable Cámara de diputados de la Nación a veces se argumenta con la meticulosidad y el conservatismo propio de una corte suprema, más que con el ímpetu y el calor de los representantes del pueblo. Me gustaría mucho que nos atreviéramos alguna vez a votar así, a la buena ventura, alguna ley un poco temeraria (*Risas.*) a fin de dar trabajo a las altas autoridades judiciales de la Nación, si es que mediaba algún reclamo o queja de parte de los patrones, que no estoy seguro fueran a mostrar tanta timidez, o tanto horror ante la ley proyectada como algunos de los representantes aquí congregados.

El texto del proyecto que ha sido sometido a nuestra consideración no dice nada que esté en contradicción con la autonomía provincial, en lo que se refiere a policía. No se crea por este proyecto una nueva policía interprovincial a los efectos de la ley del trabajo.

Se establece bien claramente—lo ha repetido muchas veces el miembro informante de la comisión—que en el orden nacional esta ley no autoriza por ahora sino la visita a las fábricas y la averiguación de las condiciones materiales, objetivas, en que se trabaja, y en ese sentido, sería perfectamente plausible autorizarla. La policía provincial será llamada a intervenir por el

inspector del trabajo, cuando haya leyes nacionales sobre el trabajo que alcancen a todo el territorio, leyes que por el momento no hay, pero que es de desear existan cuanto antes.

Esta función de la inspección del trabajo, parece que se puede admitir sin menoscabo de las autonomías de las provincias, como está admitida la defensa agrícola, que interviene de una manera intempestiva, muchas veces, con relación a las personas y a las cosas, en cualquier localidad de la República, y que tiene el derecho de reclamar el apoyo de la policía local.

La inspección del trabajo me parece una función tan eminentemente nacional como la defensa agrícola, etc.; y, por su esencia, mucho más nacional que el estudio de las aguas del subsuelo, que la protección a las ferias que se realizan en los diferentes puntos del país y para los cuales votamos dinero con mucha frecuencia; que la de construir cloacas, obras de orden completamente municipal, u obras de irrigación, que son exclusivamente regionales.

Se han alarmado algunos señores diputados ante la perspectiva de que el departamento de trabajo, en virtud de este proyecto, si llega a ser ley, intervenga en los conflictos que se produzcan entre el capital y el trabajo en las provincias. Debe notarse que se trataría de una intervención completamente oficiosa, que tendría facultad de formar el departamento, para llegar a los resultados que fuera posible conseguir, pero sin sanción penal ni legal de ninguna clase. Y es seguro que esos conflictos entre el capital y el trabajo, en los cuales pudiera intervenir el departamento en virtud del artículo 6.º de este proyecto de ley, lo ocuparían menos que a nosotros y a las otras autoridades nacionales, que los conflictos de mala política entre las autoridades locales, que ocasionan frecuentes, interminables debates sobre el valor y el significado del artículo 6.º de la Constitución. (*Risas.*)

Podemos, pues, votar tranquilamente este proyecto, sin el menor temor de invadir las sanas autonomías de las

provincias y seguros de ayudarlas a llevar las funciones humanas y progresistas del gobierno.

Sr. Pinedo—Pido la palabra.

Cuando se discutíó la ley nacional del trabajo en la comisión de legislación, recuerdo que tenía yo el honor de presidirla, y estábamos todos conformes en que era una ley de carácter nacional.

Ante las dificultades que presentaba la sanción de esa ley, convinimos en limitar el despacho a ciertos capítulos de la misma. En opinión de la mayoría de la comisión, el despacho debía limitarse al descanso dominical.

Me pareció a mí, y así lo hice presente a la honorable Cámara como miembro informante de la comisión, que esa ley debía ser más amplia y comprender la jornada máxima del trabajo, el salario, en fin, cuestiones realmente de orden nacional, y no solamente una disposición sobre el descanso, que parecía un poco incongruente en una ley del trabajo. Sin embargo, señor, ése fué el espíritu general, y así pasó la ley. Pero, al discutirse se hizo la observación que era de preverse: una ley reducida al descanso dominical no podía ser una ley nacional, sino una ley de aplicación exclusiva a la Capital y territorios nacionales.

En este momento, señor presidente, surge la misma cuestión. El señor diputado por Catamarca la ha promovido con motivo del concepto general de la ley. Se ha creído que ella podía salvarse agregando una disposición al artículo 3.º, como lo propone el señor diputado por Córdoba, doctor Peña. Pero hay otras disposiciones de la ley en las que quedaría la misma incongruencia.

A mi modo de ver, ésta era y debe ser una ley nacional.

Yo comprendo que no pueden afectarse las autonomías provinciales. Comprendo que deben ser salvadas todas aquellas cuestiones en que pueda estar realmente perjudicada la autonomía provincial. Pero que la Nación pueda legislar sobre el trabajo y que pueda vigilar las leyes que dicta, me parece elemental.

Ante estas dificultades, y ante esta diferencia de opiniones que se nota en-

tre los miembros de la comisión de legislación, yo encuentro aceptable la indicación que hacia hace un momento el señor diputado por Catamarca, y la renuevo, a mi vez, para que este asunto vuelva a comisión.

Sr. Padilla (E. E.)—Pido la palabra.

Yo no sé en qué pueda fundarse el señor diputado para encontrar disidencia dentro de este concepto sobre el cual ha habido completa uniformidad de criterio entre los miembros de la comisión.

A nombre de ella he manifestado repetidamente que estos artículos se referían a la inspección o vigilancia de las leyes que dicta el Congreso; de modo que la extensión de esas atribuciones de inspección y vigilancia dependerán de las leyes que el Congreso dicte.

Las leyes que actualmente están en vigencia, tienen, en su mayor aplicación, un alcance local, lo que quiere decir que su inspección también tendrá dicho alcance...

Sr. Pinedo—¿Y los conflictos entre el capital y el trabajo?

Sr. Padilla (E. E.)—Entonces, tendremos que aventurarnos más en la discusión. El señor diputado me objeta con el artículo 6.º, y estamos en la discusión en particular del artículo 3.º. Lo que yo quiero es dejar establecido que los miembros de la comisión de legislación a quienes se hace aparecer en discrepancia, no lo están absolutamente; en cuanto al alcance del artículo que algunos quieren aclarar, aunque no sea preciso.

Yo no le atribuyo mayor importancia a la indicación del señor diputado Peña, porque, aunque pueda pensar de distinto modo sobre el alcance que debe tener la ley del trabajo, en este caso la inspección y vigilancia, vuelvo a repetirlo, se resuelve dentro de los preceptos de las leyes que dicta el Congreso. Y como se trata de la carta orgánica del departamento del trabajo, que va a aplicar las leyes existentes y que servirá para aplicar las leyes futuras, quiere decir que si las leyes existentes no invaden la jurisdicción provincial, el departamento del trabajo tampoco invadirá dichas jurisdicciones con su inspección.

Por eso, señor presidente, respecto del agregado propuesto por el señor diputado Peña, no hago sino ser lógico con la expresión de opiniones que he anticipado. No veo, pues, que sea necesario volver a la comisión este asunto, para armonizar ideas, cuando estas ideas están expuestas con toda claridad. Cuando llegue el momento de disentir el artículo 6.º, entonces verá el señor diputado si hay o no razón para hacer la manifestación que hace.

Sr. Palacios—Que se vote.

Sr. Carbó—Pido la palabra.

El recuerdo que ha hecho el señor diputado por la Capital es muy autorizado. Pero yo quiero agregar un antecedente que ha olvidado, y es que aquel proyecto a que él se ha referido y como su nombre lo dice, era un código nacional del trabajo, que comprendía en la serie de sus capítulos, todas las materias de legislación de carácter eminentemente nacional, como lo son el Código civil, el Código de comercio, ley de inmigración, etc.

De manera que cuando el Congreso de aquella época hizo aquellas observaciones y sólo limitó la sanción a aquellos asuntos de carácter local o municipal, quiere decir que, no obstante, la opinión recordada de la mayoría de la comisión, prevaleció la opinión contraria.

Ahora, respecto de la observación con que insiste el señor presidente de la comisión, debo decir esto: por la Constitución y las leyes de fondo, las leyes sustantivas, como el Código civil, penal, de comercio, etc., las dicta el Congreso, habiéndose reservado las provincias las leyes de procedimiento para aplicarlas. Lo mismo tiene que ocurrir en el caso actual. Cuando dicte el Congreso las leyes nacionales del trabajo, que las puede dictar, entonces reservará, seguramente, la ley de procedimientos a las provincias, por ser de carácter local, por su naturaleza. Pero, en el caso actual, nos vamos a encontrar con que no hay una sola ley nacional del trabajo y vamos a sancionar la ley de procedimientos para aplicarla. Como no podemos aplicar leyes que no existen, va a resultar, como es natural, que la

autoridad nacional va a tomar ingerencia en las provincias para aplicar leyes que no existen.

Cuando se dicten esas leyes se dará la jurisdicción, si es que la Nación debe tenerla. Mientras tanto lo único que ahora puede dictar el Congreso es una ley que permita el cumplimiento estricto de las leyes de carácter local que ya tiene dictadas, sin perjuicio de todos los actos de propaganda y de enseñanza que se puedan hacer en todo el país.

Las consideraciones que ha hecho el mismo señor diputado y la disidencia manifestada por el señor diputado por Córdoba, miembro de la comisión...

Sr. Bas—No he manifestado ninguna disidencia: he aclarado un concepto.

Sr. Castillo—Fué una pequeña disidencia.

Sr. Bas—¡Absolutamente!

Sr. Castillo—El asentimiento del señor miembro informante para aceptar el agregado propuesto por el señor diputado Peña, la disidencia del señor diputado Palacios para que se vote el despacho de la comisión tal como ha salido...

Sr. Palacios—¿Cómo va a ser disidencia, señor diputado? No hay disidencia de ninguna clase.

Lo que quiero es que se vote el despacho de la comisión como corresponde. La disidencia es con el señor diputado.

Sr. Castillo—Perdóneme, señor diputado. Si el señor diputado miembro de la comisión pide que se vote el despacho y el señor miembro informante de la comisión acepta una modificación al despacho, hay disidencia.

Sr. Palacios—Y en el caso que exista, ¿va a evitarlo el señor diputado con que el despacho vuelva a comisión?

Sr. Presidente—Si me permiten los señores diputados... Hay una moción previa, hecha por el señor diputado por la Capital.

Sr. Castillo—Sí, señor; y he pedido la palabra para apoyarla.

Sr. Presidente—La presidencia necesita saber si es apoyada por los cuatro señores diputados que exige el reglamento.

—Apoyado.

Sr. Palacios—Pido la palabra.

Sr. Presidente—¿Para hablar sobre la moción?

Sr. Palacios—Sí, señor.

El hecho de que el dictamen vuelva a comisión, significaría simplemente que la Cámara no quiere ocuparse de este asunto, que realmente tiene interés nacional.

Los miembros de la comisión de legislación han manifestado su opinión en el seno de la misma después de una discusión amplia y razonable. Si el proyecto vuelve a ella, con toda seguridad va a mantener sus conclusiones, porque son el fruto de un estudio maduro y reflexivo.

La Cámara ha discutido durante dos horas largas lo que se refiere al carácter nacional o especial con que deben aplicarse las disposiciones de esta ley. Lo que corresponde lógicamente, pues, es que se vote en primer término el despacho, y, luego, si es rechazado, el artículo con el agregado del señor diputado por Córdoba. Pero, mandar nuevamente el asunto a comisión, aparte de no resolver nada, significaría mala voluntad por parte de la Cámara para tratar una cuestión de tanta importancia.

Sr. Presidente—¿Mantiene su moción el señor diputado por la Capital?

Sr. Pinedo—No, señor; no mantengo mi moción, ante la disidencia del señor diputado.

Sr. Presidente—Se va a votar el artículo en la forma propuesta por la comisión.

Sr. Atencio—Con el agregado.

Sr. Galigniana Segura—Debe votarse el agregado.

Sr. Presidente—No lo ha aceptado la comisión: se votará en seguida.

Sr. Padilla (E. E.)—Puede votarse por partes.

Sr. Peña—Se puede votar el agregado.

Sr. Secretario Sorondo—El agregado dice así: «en la Capital y territorios nacionales».

Sr. Presidente—Se va a votar si se acepta o no el agregado propuesto, tal como se acaba de leer.

—Se vota, y resulta afirmativa de 42 votos contra 20, quedando el artículo en los siguientes términos:

Art. 3.º El departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo en la Capital y territorios nacionales».

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Aquí es, precisamente, donde cabe la observación que formulaba. Me parece que si se eliminan del artículo las palabras «durante las horas destinadas al trabajo», se habrá evitado la contradicción que, en mi concepto, existe entre los artículos 3.º y 4.º, y quedaría habilitada la inspección para penetrar en todo momento.

Sr. Palacios—Muy bien.

Sr. Padilla (E. E.)—Es una defensa del domicilio, que existe en todos los casos.

Sr. Atencio—Entonces, no puede ser permanente la inspección.

Sr. Padilla (E. E.)—Pero, señor diputado...

Sr. Atencio—Continúo con la palabra, señor presidente.

Una fábrica donde el trabajo declarado se realiza durante ocho horas, único tiempo durante el cual podrá permanecer en ella el inspector del trabajo, de acuerdo con los términos precisos del artículo 4.º, puede perfectamente violar la ley, y, en vez de trabajar ocho horas, hacer trabajar a sus operarios diez horas.

Sr. Padilla (E. E.)—¡Pero si no hay ninguna ley que ordene el trabajo de ocho horas!

Un señor diputado—Puede ser que se dicté.

Sr. Atencio—No se percibe el señor diputado de que la ley que se violaría no es la ley que autoriza el trabajo de diez o de ocho horas, sino esta misma ley. ¿Cómo podría comprobar el inspector del trabajo las violaciones a esta ley, si ellas se producen en aquellas horas en que, según la declaración de la fábrica, no se trabaja, y en que según los hechos, se estuviera trabajando?

Sr. Padilla (E. E.)—No puede haber ese trabajo clandestino, por cuanto la fábrica lo puede hacer en cualquier hora.

Sr. Atencio—Precisamente, lo que la ley trata de evitar es esa clandestinidad del trabajo. Durante las horas oficiales, las horas declaradas, pueden estar las personas que trabajen dentro de las prescripciones de la ley, mientras que en horas clandestinas estarán los menores de edad, las mujeres, etc., y precisamente, para que sea eficaz la inspección del trabajo y evitar que eso se produzca, es necesario autorizar la inspección en todo momento.

Sr. Del Barco—Pido la palabra.

Como miembro de la comisión acepto la indicación del señor diputado por Buenos Aires, porque a mí me consta lo siguiente: que la ley de descanso dominical se viola en la mayor parte de las grandes tiendas y almacenes de esta capital. Allí se trabaja los domingos y se obliga a los empleados a concurrir esos días, a fin de preparar el trabajo para el día siguiente.

Por consiguiente, siendo así que los inspectores sólo podrían entrar en las horas de trabajo, es decir, en los días hábiles, no se podría llenar el objeto deseado.

El domingo, es evidente que no podrían entrar, porque ese día no se debe trabajar por la ley; y, sin embargo, es sabido que se obliga a mucha gente a trabajar, habiéndose probado, por intermedio de la policía, la forma descarada en que se viola la ley.

Creo, pues, que no habría inconveniente en autorizar la inspección en la forma más amplia, como pide el señor diputado.

Sr. Palacios—Que se vote.

Sr. Del Barco—Es evidente, por lo demás, que los inspectores no irán a horas intempestivas, ni a perjudicar a nadie.

Sr. Presidente—Se votará el artículo en la forma propuesta por la comisión.

—Después de algunos momentos de espera para formar quórum, dice el

Sr. Presidente—Se han retirado algunos señores diputados y no hay número para votar.

Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo las 6 y 55 p. m.